

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Vigésimo Quinta Reunión del Comité de Expertos
Del 16 al 20 de marzo de 2015
Washington, D.C.

OEA/Ser.L.
SG/MESICIC/doc.434/15 rev. 4
20 marzo 2015
Original: español

SAINT KITTS Y NEVIS

INFORME FINAL

(Aprobado en la sesión plenaria del 20 de marzo de 2015)

SUMARIO

Teniendo en cuenta que la Saint Kitts y Nevis no se encontraba vinculado al MESICIC cuando se desarrolló la Primera Ronda del Mecanismo, el presente informe contiene el análisis integral de la implementación de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción seleccionadas por el Comité de Expertos del MESICIC para la Primera Ronda, así como para la Cuarta Ronda.

Las disposiciones seleccionadas para la Primera Ronda son las previstas en el artículo III, párrafos 1º y 2º, sobre normas de conducta y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento; artículo III, párrafo 4º, sobre sistemas para la declaración de ingresos, activos y pasivos; artículo III, párrafo 11, sobre mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción; artículo XIV sobre asistencia y cooperación; y artículo XVIII sobre autoridades centrales.

A su vez, para la Cuarta Ronda se seleccionó el artículo III, párrafo 9º, correspondiente a los “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”.

El análisis se efectuó dentro del marco de la Convención, el Documento de Buenos Aires, el Reglamento del Comité y las metodologías adoptadas por el mismo para la realización de las visitas *in situ* y para la Cuarta Ronda, incluidos los criterios allí establecidos para orientar el análisis sobre tratamiento igualitario para todos los Estados Parte, equivalencia funcional, y los propósitos tanto de la Convención como del MESICIC de promover, facilitar y fortalecer la cooperación entre los Estados Parte en la prevención, detección, sanción y erradicación de la corrupción.

Para llevar a cabo el análisis se contó con la respuesta de Saint Kitts y Nevis al cuestionario; con la información recogida por la Secretaría Técnica; y con una nueva e importante fuente de información, como fue la visita *in situ* realizada entre el 6 y el 8 de octubre de 2014 por los miembros del subgrupo de análisis de Saint Kitts y Nevis, integrado por México y Trinidad y Tobago, con el apoyo de la Secretaría Técnica, en donde se pudo precisar, aclarar y complementar la información suministrada por Saint Kitts y Nevis y escuchar opiniones de organizaciones de la sociedad civil, lo cual contribuyó a que el Comité contara con información objetiva y completa sobre dichos temas.

El análisis de las disposiciones de la Convención seleccionadas para la Primera y Cuarta Rondas se orientó, de acuerdo con lo previsto en la metodología para la Cuarta Ronda con respecto a los Estados no vinculados al MESICIC en la Primera Ronda, a determinar si Saint Kitts y Nevis cuenta con un marco jurídico en cada uno de los temas y órganos de control superior analizados, si éste es adecuado para los propósitos de la Convención y si existen resultados objetivos y, teniendo en cuenta lo observado, se formularon recomendaciones pertinentes.

Algunas de las recomendaciones formuladas a Saint Kitts y Nevis, para su consideración, en relación con las disposiciones seleccionadas para la PRIMERA RONDA apuntan a propósitos tales como los que se destacan a continuación:

En cuanto al análisis de las normas de conducta y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento, se recomendó a Saint Kitts y Nevis, entre otros aspectos: diseñar e implementar un programa integral de capacitación dirigido a los servidores públicos y autoridades responsables de velar por el cumplimiento del régimen descrito en la Ley del Servicio Público de 2011, en sus Códigos y Reglamento del Servicio Público de 2014; adoptar las medidas necesarias tendientes a implementar a la brevedad las disposiciones de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2013, así como para crear y conformar con la misma oportunidad la Comisión de Integridad a que se refiere la sección 11 de este ordenamiento.

En cuanto al análisis de los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos, se formularon, entre otras, las siguientes recomendaciones: enmendar la Ley de Integridad en la Función Pública 2013, con miras a reglamentar las condiciones, procedimientos y otros aspectos pertinentes con respecto a la publicidad de las declaraciones de activos, ingresos y pasivos, así como poner a disposición medios electrónicos para completar la declaración de activos, ingresos y pasivos y para entregarla a la Comisión de Integridad, cuando ésta se cree.

En relación con los mecanismos de participación ciudadana, se recomendó, entre otros aspectos: desarrollar instrumentos normativos que otorguen carácter público a la información y documentación relativa a la gestión de los órganos y entidades del sector público que establezcan el derecho de todas las personas a solicitar información en poder o bajo control de las instituciones públicas, así como establecer mecanismos de consulta y de participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción en Saint Kitts y Nevis.

En lo que se refiere a la asistencia recíproca, cooperación técnica mutua y autoridades centrales, se recomendó diseñar e implementar un programa integral de capacitación y difusión para las autoridades y funcionarios competentes, de tal manera que conozcan y puedan aplicar las disposiciones contenidas en la Convención y en otros tratados que Saint Kitts y Nevis ha suscrito en materia de asistencia mutua en la investigación o procesamiento de prácticas corruptas; así como considerar ratificar la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal y participar activamente en las reuniones del Grupo de Trabajo sobre Cooperación Jurídica en Materia Penal del proceso de Reuniones de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA).

Con base en el análisis y los aportes realizados a lo largo del informe, también se formularon, entre otras, las siguientes recomendaciones generales: diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación; y seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular.

En relación con la CUARTA RONDA, los cuatro órganos seleccionados por Saint Kitts y Nevis que son analizados en este informe son la Oficina del Fiscal General, la Corte de Magistrados, la Oficina del *Ombudsman* y la Real Fuerza Policial de Saint Kitts y Nevis. Algunas de las recomendaciones formuladas en relación con los anteriores órganos apuntan a propósitos tales como los que se destacan a continuación:

En relación con la Oficina del Fiscal General, nombrar al Fiscal General de conformidad con lo dispuesto en la sección 81 constitucional; desarrollar instrumentos, manuales y/o guías que orienten a los fiscales a instituir y desarrollar de manera adecuada y efectiva los procesos penales relacionados con prácticas corruptas, así como dotarla con los recursos humanos profesionales necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones, principalmente las relacionadas con la persecución de los delitos de corrupción.

Con respecto a Corte de Magistrados, dotarla con los recursos financieros necesarios para asegurar capacitación adecuada y permanente para todos sus funcionarios, incluidos los Magistrados, sobre todo en temas relacionados con el correcto enjuiciamiento de los casos que involucren actos de corrupción, así como en materia de ética, probidad y transparencia en la función jurisdiccional.

En relación con la Oficina del *Ombudsman*, adoptar a la brevedad las medidas pertinentes para dotarla con los recursos humanos y financieros necesarios para su adecuado funcionamiento, así como establecer mecanismos que aseguren el efectivo cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el *Ombudsman* en sus investigaciones por parte de las entidades públicas sujetas a su supervisión.

Con respecto a la Real Fuerza Policial de Saint Kitts y Nevis, complementar los documentos que describen las funciones del personal a su servicio con procedimientos documentados, manuales o guías relacionados con las funciones de investigación de los delitos de corrupción, desarrollar programas de capacitación periódica para la correcta y efectiva investigación de tales delitos, así como desarrollar campañas de prevención de las prácticas corruptas, de divulgación de las consecuencias que las mismas acarrearán, y de concientización sobre el deber de respetar y proteger el patrimonio público.

COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN

INFORME RELATIVO A LA IMPLEMENTACIÓN EN SAINT KITTS Y NEVIS DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS EN LA PRIMERA Y CUARTA RONDAS ^{1/}

INTRODUCCIÓN

1. Contenido del Informe^{2/}

[1] En el presente informe se hará referencia, en primer lugar, a la implementación en Saint Kitts y Nevis de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción (en adelante “la Convención”) seleccionadas por el Comité de Expertos del MESICIC (en adelante “el Comité”) para la Primera Ronda previstas en el artículo III, párrafos 1º y 2º, sobre normas de conducta y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento; artículo III, párrafo 4º, sobre sistemas para la declaración de ingresos, activos y pasivos; artículo III, párrafo 11, sobre mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción; artículo XIV sobre asistencia y cooperación; y artículo XVIII sobre autoridades centrales.^{3/}

[2] En segundo lugar, se hará referencia a la implementación en Saint Kitts y Nevis de la disposición de la Convención seleccionada por el Comité para la Cuarta Ronda, prevista en el artículo III, párrafo 9º, relativa a los “*órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas*”.

2. Ratificación de la Convención y vinculación con el Mecanismo

[3] De acuerdo con el registro oficial de la Secretaría General de la OEA, Saint Kitts y Nevis ratificó la Convención el 4 de agosto de 2004 y depositó el instrumento de ratificación respectivo el 26 de agosto del mismo año.

1. El presente informe fue aprobado por el Comité, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3, g) y 25 del Reglamento y Normas de Procedimiento, en la sesión plenaria celebrada el día 20 de marzo de 2015, en el marco de su Vigésimo Quinta Reunión, la cual tuvo lugar en la sede de la OEA, del 16 al 20 de marzo de 2015.

2. Teniendo en cuenta que Saint Kitts y Nevis no se encontraba vinculado al MESICIC cuando se desarrolló la Primera Ronda del Mecanismo, el presente proyecto de informe preliminar fue elaborado de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23, inciso a), y 28 del Reglamento del Comité (documento SG/MESICIC/doc.9/02 rev. 5), así como con la metodología para el análisis de la implementación de la disposición de la Convención seleccionada en la Cuarta Ronda y para el seguimiento de las recomendaciones formuladas en la Primera Ronda (documento SG/MESICIC/doc. 289/11 rev. 2) y la estructura para los informes por país para los Estados no vinculados al MESICIC en la Primera Ronda (documento SG/MESICIC doc. 291/11 rev. 2), estos dos últimos documentos adoptados por el Comité en su Decimonovena Reunión celebrada en la sede de la OEA del 12 al 16 de septiembre de 2011.

3. El capítulo XII de metodología para el análisis de la implementación de la disposición de la Convención seleccionada en la Cuarta Ronda y para el seguimiento de las recomendaciones formuladas en la Primera Ronda prevé que “...a los Estados que no se encontraban vinculados al Mecanismo cuando se desarrolló la Primera Ronda de Análisis, se les aplicará la metodología adoptada por el Comité para dicha Ronda [documento SG/MESICIC/doc.21/02] en lo que respecta al análisis de las disposiciones de la Convención que fueron seleccionadas para la misma, salvo en lo que corresponda a sus órganos de control superior, que serán analizados con base en la metodología adoptada por el Comité para la Cuarta Ronda, teniendo en cuenta que el Comité acordó en su Decimoctava Reunión que dichos órganos serán analizados de manera integral.”

[4] Asimismo, Saint Kitts y Nevis suscribió la Declaración sobre el MESICIC el 9 de diciembre de 2010.

I. SUMARIO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA

1. Respuesta de Saint Kitts y Nevis

[5] El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida de Saint Kitts y Nevis en todo el proceso de análisis y, en especial, de la Procuraduría General, la cual se hizo evidente, entre otros aspectos, en su respuesta al cuestionario y en la disponibilidad que siempre mostró para aclarar o completar el contenido de la misma, al igual que en el apoyo para la realización de la visita *in situ* a la que se hace referencia en el párrafo siguiente del presente informe. Saint Kitts y Nevis envió, junto con su respuesta, las disposiciones y documentos que estimó pertinentes, disponibles en: www.oas.org/juridico/english/mesicic4_kna.htm

[6] Asimismo, el Comité deja constancia que el Estado analizado otorgó su anuencia para la práctica de la visita *in situ* de conformidad con lo previsto en la disposición 5 de la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ*⁴, la cual se realizó del 6 al 8 de octubre de 2014, por parte de los representantes de México y Trinidad y Tobago, en su calidad de integrantes del Subgrupo de Análisis, contando para ello con el apoyo de la Secretaría Técnica del MESICIC. La información obtenida en dicha visita se incluye en los apartados correspondientes del presente informe y su agenda se anexa al mismo, de conformidad con lo previsto en la disposición 34 de la citada *Metodología*.

[7] El Comité tuvo en cuenta para su análisis la información suministrada por Saint Kitts y Nevis hasta el 8 de octubre de 2014, y la que fue aportada y le fue solicitada por la Secretaría Técnica y por los integrantes del Subgrupo de Análisis para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con el *Reglamento y Normas de Procedimiento*; la *Metodología para el Análisis de la Implementación de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción Seleccionada en la Cuarta Ronda*; y la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ*, disponibles en: www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_docs_sp.htm

2. Documentos e información recibidos de organizaciones de la sociedad civil y /o, entre otros, de organizaciones del sector privado; asociaciones profesionales; académicos e investigadores

[8] El Comité no recibió, dentro del plazo fijado en el Calendario para la Cuarta Ronda, documentos de organizaciones de la sociedad civil de conformidad con lo previsto en el artículo 34, inciso b), del Reglamento del Comité.

[9] No obstante, con ocasión de la práctica de la visita *in situ* realizada al Estado analizado, se recabó información de organizaciones de la sociedad civil y de asociaciones profesionales que fueron invitadas a participar en reuniones con tal fin, de conformidad con lo previsto en la disposición 27 de la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ*, cuyo listado se incluye en la agenda de dicha visita que se anexa al presente informe. Esta información se refleja en los apartados correspondientes del mismo, en lo que resulta pertinente para sus propósitos.

4. Disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf

II. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN POR EL ESTADO PARTE DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA LA PRIMERA Y CUARTA RONDAS

A) ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA LA PRIMERA RONDA

Marco jurídico-institucional^{5/}

[10] Saint Kitts y Nevis es un Estado federal democrático soberano. Obtuvo su independencia del Reino Unido el 19 de septiembre de 1983. Su Constitución es la ley suprema del país. El capítulo I, sección 2 constitucional establece que si cualquier ley es incongruente con la Constitución, ésta prevalece y la otra ley, hasta el grado de la incongruencia, será nula.

[11] La gobernanza de Saint Kitts y Nevis tiene como premisa la separación de poderes, consagrada en la Constitución. Este tipo de gobernanza está modelada en un sistema tripartito que divide el Estado en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. A cada uno de estos poderes se le asignan atribuciones y responsabilidades separadas e independientes según la Constitución y las leyes del Estado.

[12] El Poder Ejecutivo está compuesto por Su Majestad, la Reina Isabel II, como Jefe de Estado, el Primer Ministro y el Gabinete. Su Majestad está representada en Saint Kitts y Nevis por un ciudadano del Estado designado por Su Majestad como Gobernador General. El Gobernador General ejerce la autoridad ejecutiva en Saint Kitts y Nevis en nombre de Su Majestad. El Primer Ministro es designado para su cargo por el Gobernador General. También hay un cargo de Viceprimer Ministro y otros puestos de ministros de gobierno. El Gobernador General puede nombrar a las personas que ocuparán el cargo de ministro por recomendación del Primer Ministro.

[13] El Gabinete consta del Primer Ministro, los Ministros de Gobierno y el Procurador General, quien es el principal asesor jurídico del gobierno. El Gabinete asesora al Gobernador General y es responsable colectivamente ante la Asamblea Nacional por cualquier consejo dado al Gobernador General por o bajo las atribuciones generales del Gabinete y de todas las acciones realizadas por o bajo las atribuciones de cualquier ministro en ejecución de sus funciones. Estas funciones no se aplican en relación con: el nombramiento y destitución de su cargo de los ministros y secretarios parlamentarios, la asignación de responsabilidad a cualquier ministro según la sección 54, o la autorización para que otro ministro se haga cargo de las funciones del Primer Ministro durante su ausencia o enfermedad; la disolución del Parlamento; los asuntos a los que se refiere la sección 66 (que se relaciona con la prerrogativa de clemencia); o en relación con el gobierno de la isla de Nevis, cualquier asunto con respecto al cual el Parlamento no está facultado para promulgar leyes para la isla de Nevis.

[14] Como el Poder Legislativo del Estado, el Parlamento promulga leyes para la paz, el orden y el buen gobierno de Saint Kitts y Nevis. Excepto cuando se declara expresamente, las atribuciones del Parlamento a que se hace referencia arriba no se extienden a ninguno de los temas identificados en el capítulo X constitucional para los cuales la Legislatura de la isla de Nevis tiene la facultad exclusiva de acción. El Parlamento consiste en Su Majestad y una Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional consta de once representantes que corresponden al número de circunscripciones y cuatro senadores.

5. Véase respuesta de Saint Kitts y Nevis al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 1 a 3, disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_kna_Response_4th_Round.pdf

Un senador es designado por el Gobernador General de conformidad con la asesoría del Líder de la Oposición y los otros tres son designados por el Gobernador General de conformidad con la asesoría del Primer Ministro. El Presidente de la Asamblea Nacional y el Procurador General también son miembros de la Asamblea Nacional.

[15] La Corte Suprema del Caribe Oriental es responsable de la administración de justicia en Saint Kitts y Nevis. Está compuesta por la Corte Superior de Justicia y la Corte de Apelaciones y tiene jurisdicción ilimitada en Saint Kitts y Nevis. Los casos menos graves se juzgan en la Corte de Magistrados. Esta Corte está dividida en tres (3) distritos. Las apelaciones de la Corte de Magistrados y la Corte Superior de Justicia se presentan ante la Corte de Apelaciones. Las apelaciones de la Corte de Apelaciones se radican ante el Comité Judicial del Consejo Privado. El Comité Judicial del Consejo Privado sesiona en el Reino Unido y es la Corte de Apelaciones más alta y final de Saint Kitts y Nevis. Los magistrados, el Secretario de la Corte Superior y las personas que ocupan temporal o permanentemente cargos en el despacho del Procurador General o de la Dirección de la Fiscalía son designados por el Gobernador General de conformidad con las recomendaciones de la Comisión del Servicio Público, una vez que la Comisión ha consultado con la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos para formular su recomendación.

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN)

1.1. CONFLICTOS DE INTERESES

1.1.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

[16] Saint Kitts y Nevis tiene un conjunto de normas de conducta, entre las cuales cabe resaltar las siguientes:

[17] – Disposiciones de rango constitucional^{6/}, como las que aparecen en la sección 28(1), que dispone, entre otras cosas, que ninguna persona será elegible para ser electa o designada como miembro de la Asamblea Nacional (representante o senador) si: (a) está, por virtud de una acción propia, bajo cualquier reconocimiento de lealtad, obediencia o adhesión a un poder o Estado extranjero; (b) es ministro de una religión; (c) ha quebrado sin rehabilitación, habiendo sido declarado o considerado por alguna otra forma en quiebra según cualquier ley o (d) está sirviendo una sentencia de 12 meses o más de inhabilitación. Asimismo, la sección 28(2) establece que, de así disponerlo el Parlamento, una persona no será elegible para ser electa o designada como miembro de la Asamblea Nacional si ocupa permanente o temporalmente cualquier cargo especificado por el Parlamento y cuyas funciones involucran responsabilidad por, o en relación con, la conducción de cualquier elección de Representantes o miembros de la Asamblea de la isla de Nevis.

[18] Adicionalmente, la sección 28(5) constitucional prevé que, de así disponerlo el Parlamento, y sujetándose a las excepciones y limitaciones (en su caso) que pueda prescribir el Parlamento, una persona no será elegible para ser electa o designada como miembro de la Asamblea Nacional si: (a) ocupa permanente o temporalmente cualquier cargo o nombramiento (ya sea especificado individualmente o por referencia a una clase de cargos o nombramientos) salvo el cargo de miembro electo o miembro nominado de la Asamblea de la isla de Nevis o miembro de la Administración de la isla de Nevis; (b) pertenece a cualquier fuerza de defensa o a cualquier clase de persona comprendida

6. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_kna_const_stkitts.pdf

en tal fuerza; (c) pertenece a cualquier fuerza policial o a cualquier clase de persona comprendida en tal fuerza; o (d) sujetándose a cualquier excepción o limitación prescrita por el Parlamento, tiene cualquier interés en cualquier contrato gubernamental que se pudiera prescribir de esa manera.

[19] – Disposiciones normativas, como las contenidas en el Código de Conducta y Ética del Servicio Público^{7/} promulgado en 2014 de conformidad con la sección 53(3)(c) de la Ley del Servicio Público de 2011^{8/}, que establece normas sobre la prevención de los conflictos de intereses en el desempeño de las funciones públicas. Estas disposiciones se basan en el cometido del servicio público previsto en la sección 5 del Código. Este cometido incluye la prestación y la administración de los servicios públicos de los cuales es responsable el gobierno con integridad, honradez e imparcialidad y colaborar en la formulación de las políticas gubernamentales mediante la prestación de asesoría objetiva, honesta, integral, exacta y oportuna. También son acordes con la sección 7 del Código, que señala que los funcionarios públicos deben conducirse con integridad, imparcialidad y honradez.

[20] Específicamente, la sección 10 del Código señala que los funcionarios públicos no deben (a) hacer mal uso de su cargo oficial o de la información adquirida en el curso de sus responsabilidades oficiales en beneficio de sus intereses privados o los de terceros; o recibir beneficios de ningún tipo de un tercero que razonablemente pudiera considerarse que comprometen su juicio o integridad personal. Asimismo, la sección 28(1) del Código señala que un funcionario público en ningún momento deberá emprender ninguna actividad o inversión privada que pueda entrar en conflicto con sus deberes o responsabilidades oficiales o que lo coloque o dé la impresión de colocarlo en una posición en la cual pueda usar su puesto oficial para su beneficio. Adicionalmente, la sección 28(2) de este Código establece que un funcionario público que opina que cualquier actividad o inversión privada en la que está involucrado o en la cual tiene un interés pecuniario podría dar lugar a conflictos de intereses debe declarar esto plenamente al Gobernador General a través del Jefe de Personal y debe cumplir las condiciones y restricciones que el Gobernador General, actuando de conformidad con las recomendaciones de la Comisión del Servicio Público, pueda considerar necesarias.

[21] La sección 29 del Código establece que un funcionario público no deberá realizar ningún trabajo privado relacionado con el ejercicio de sus deberes como funcionario público. Además, las secciones 30 y 31 del Código establecen que un funcionario público no deberá, sin permiso del Gobernador General actuando con la recomendación de la Comisión del Servicio Público, participar en un empleo remunerado para juntas o comités privados o, estando de licencia, participar en actividades comerciales o aceptar un empleo remunerado que normalmente no será ejercido cuando un funcionario público está de licencia antes de su retiro o renuncia.

[22] Asimismo, Saint Kitts y Nevis en su respuesta al cuestionario^{9/} señala que en 2013 se promulgó la Ley de Integridad en la Función Pública^{10/}. Esta Ley —que no entra en vigor todavía— es aplicable a los funcionarios públicos identificados en su Primera Cláusula. La Segunda Cláusula de dicha Ley describe un código de conducta que señala que un funcionario público (i) no deberá permitir que sus intereses privados entren en conflicto con su cargo, (ii) debe tener consideración de su responsabilidad de evitar tales conflictos y (iii) debe explicar plenamente tales conflictos cuando son inevitables. La Parte II de la Segunda Cláusula define lo que constituye un conflicto de intereses y señala la responsabilidad de los funcionarios de adoptar medidas para evitar tales conflictos de intereses. Un funcionario público que actúe de tal manera que permita o pueda razonablemente

7. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_kna_pub_serv_so_9_2014.pdf

8. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_kna_pub_ser_act_19_2011.pdf

9. Véase respuesta de Saint Kitts y Nevis al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 6, *supra* nota 4.

10. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_kna_int_pub_lif.pdf

pensarse que permite que surja un conflicto de intereses entre los intereses públicos y privados estará cometiendo el delito de abuso de funciones y de ser condenado se sujetará a una multa de treinta mil dólares (EC \$30,000)^{11/} o cinco años de privación de la libertad.

[23] La legislación de Saint Kitts y Nevis también tiene mecanismos para hacer cumplir las normas de conducta a que se hizo referencia *supra*, entre los que cabe destacar las siguientes:

[24] La Comisión del Servicio Público es establecida según la sección 77 del Capítulo VII de la Constitución. La sección 78 constitucional establece que la facultad para ejercer control disciplinario sobre las personas que ocupan cargos dentro del servicio público y la facultad para despedir a tales personas de su cargo recae en el Gobernador General, actuando de conformidad con las recomendaciones de la Comisión del Servicio Público. En virtud de la sección 78(3) constitucional, esta disposición es aplicable a todos los cargos públicos, excepto a las personas que ocupan los cargos de Procurador General, Fiscal General, Director de Auditoría, miembros de la Policía, funcionarios jurídicos designados según la sección 83 constitucional y Secretarios Permanentes, jefes y subjefes de departamentos gubernamentales y Asesores Profesionales en Jefe nombrados con base en la sección 79 de la Constitución. El procedimiento para la acción disciplinaria adoptada en contra de estos funcionarios está prevista específicamente por la Constitución.

[25] La Comisión del Servicio Público ejerce sus funciones de conformidad con las disposiciones de la Ley del Servicio Público de 2011 y los Reglamentos emitidos de acuerdo con dicha Ley, como el Código de Conducta y Ética del Servicio Público a que se hizo referencia *supra*. La sección 31 de la Ley del Servicio Público señala las formas de disciplina, que incluyen descenso de categoría, reducción de sueldo, suspensión, aplazamiento o retención de incremento o sobretasa por pérdidas al gobierno por negligencia o conducta indebida del funcionario público. La sección 38 de la Ley señala el procedimiento de despido de un funcionario público y la sección 39 establece la terminación de servicios de un funcionario público por despido a consecuencia del procedimiento disciplinario.

[26] Particularmente, el incumplimiento del Código de Conducta y Ética del Servicio Público en relación con la notificación de conflictos de intereses o en relación con los asuntos contenidos en las secciones 29, 30 y 31 del Código pueden constituir conducta indebida de carácter grave, según lo especifica la sección 2 del Código. La conducta indebida grave se refiere a conducta inapropiada o no profesional que pueda ameritar el despido del funcionario público si se determina su culpabilidad. La conducta indebida grave incluye la inobservancia de cualquiera de las leyes, órdenes, reglas o reglamentos que rigen el servicio público y la no notificación o revelación de información que razonablemente debe ser notificada o revelada cuando la consecuencia de su falta de revelación equivale a una injusticia grave, y ambos incluyen la no notificación de conflictos de intereses y los asuntos contenidos en las secciones 29, 30 y 31 del Código. Un funcionario público declarado culpable de conducta indebida grave puede ser suspendido, retirado o despedido obligatoriamente del servicio o sufrir reducción en clasificación o suspensión en incrementos.

[27] Una vez que se presenta una denuncia contra un funcionario público y se llama tal información a la atención del Jefe de Departamento del funcionario público, el caso puede ser presentado ante la Comisión del Servicio Público para la adopción de procedimientos disciplinarios. Cabe resaltar que la sección 55(2) del Código de Conducta y Ética del Servicio Público dispone que un funcionario debe informar a su Jefe de Departamento o, en aquellos casos que involucran a su Jefe de Departamento, al Jefe del Servicio Público, cualquier caso de incumplimiento del Código de que se percate. Si el

11. El tipo de cambio de XCD \$ 1 dólar del Caribe Oriental es aproximadamente USD 0.37 dólares estadounidenses (al 16 de diciembre de 2014).

funcionario que notificó sobre el asunto opina que la respuesta no representa una respuesta razonable a las inquietudes planteadas, puede enviar un informe por escrito directamente a la Comisión del Servicio Público.

1.1.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

[28] Con respecto a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias orientadas a prevenir los conflictos de intereses y los mecanismos para hacerlas cumplir que examinó el Comité, con base en la información suministrada por Saint Kitts y Nevis en su respuesta al cuestionario y durante la visita *in situ*, conforman, colectivamente, un conjunto de medidas pertinentes para la promoción de los propósitos de la Convención. No obstante, el Comité estima oportuno formular ciertos comentarios en relación con las mismas:

[29] En primer lugar, con base en la respuesta del Estado analizado al cuestionario, así como de la información recabada durante la visita *in situ*, el Comité toma nota de la relativa reciente adopción de la Ley del Servicio Público de 2011, la cual, junto con los Códigos sobre Reclutamiento y Nombramiento de Funcionarios, de Conducta y Ética, de Disciplina y el Reglamento del Servicio Público, aprobados todos en 2014, sustituyeron a las Órdenes Generales del Servicio Público vigentes desde 1956. Sin embargo, con ocasión de la vista *in situ*, fue puesto de presente que, en virtud de su reciente adopción, existe cierto desconocimiento por parte del funcionariado público sobre este nuevo marco normativo, lo cual, entre otros aspectos, podría provocar que involuntariamente se esté aplicando en ciertos casos el régimen anterior previsto en las Órdenes Generales de 1956.

[30] Para el Comité resulta de la mayor importancia que los funcionarios y autoridades responsables de velar por el cumplimiento del régimen descrito en la sección anterior estén al tanto de la existencia de estas nuevas disposiciones que regulan el ejercicio de la función pública en Saint Kitts y Nevis, razón por la cual formulará recomendaciones en este sentido. (Véase recomendaciones de la sección 1.1.4, incisos a) y b), del literal “A” del capítulo II de este informe).

[31] En segundo lugar, si bien el Comité observa la existencia de normas que regulan la idoneidad que exige el ejercicio de la función pública, denota, en el régimen vigente, una ausencia de mecanismos de carácter preventivo aplicables a la generalidad de los servidores públicos que permitan detectar y, en su caso, adoptar las medidas correctivas pertinentes respecto de los cuales se podría presentar algún conflicto de interés en el ejercicio de la función pública. Además, tampoco se advierten mecanismos que posibiliten determinar, en casos concretos, si quien desempeña funciones públicas se encuentra en una situación de conflictos de intereses y que al mismo tiempo permitan adoptar oportunamente las medidas necesarias para la protección del interés público. Esto sugiere que tales mecanismos sean creados o fortalecidos con el propósito de facilitar a los órganos competentes, como la Comisión del Servicio Público y/o la Comisión de Integridad –cuando ésta sea creada de conformidad con lo previsto en la Ley de Integridad en la Función Pública de 2013 –, el cumplimiento de su función preventiva y garantizar que efectivamente no se produzcan nombramientos contrarios al régimen de inhabilidades e incompatibilidades vigentes en el servicio público del Estado analizado.

[32] Para el Comité las anteriores consideraciones, que revisten la mayor transcendencia, podrían verse superadas si se toma en cuenta lo dispuesto en la sección 5 de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2013 que señala que “...una persona que, a partir de la entrada en vigor de esta Ley es funcionario público deberá, dentro de un plazo que se prescribirá mediante una Orden,

completar y presentar una declaración ante la Comisión [la Comisión de Integridad] de sus ... intereses privados, y en lo sucesivo el funcionario público deberá en cada año subsiguiente presentar declaraciones adicionales de sus ... intereses privados”, así como lo dispuesto en las secciones 12 a 20 del Código de Conducta previsto en la Segunda Cláusula de la citada Ley.

[33] Sin embargo, como quedó expresado en la sección anterior, la Ley de Integridad en la Función Pública, si bien está aprobada por la Asamblea Nacional del Estado analizado, la misma no está siendo implementada (“*in force*”) principalmente porque, de acuerdo con la información recabada durante la visita *in situ*, la Comisión de Integridad a que se refiere la sección 11 de la misma Ley – órgano de control superior responsable de cumplir y hacer cumplir sus disposiciones– no ha sido creada ni conformada, en virtud de que no ha sido aclarado lo referente al presupuesto y los recursos que habrán de cubrir las operaciones de la Comisión, entre otras razones por el proceso en que se encuentran las autoridades competentes para la identificación de los recursos que cubran la estructura y operaciones de dicha Comisión dentro del presupuesto nacional del Estado.

[34] En este sentido y subrayando la importancia que revisten las atribuciones y responsabilidades que la Ley de Integridad en la Función Pública concede a la Comisión de Integridad para la estricta observancia de sus disposiciones, incluyendo aquellas orientadas a prevenir conflictos de intereses para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas como refiere el párrafo 1º del artículo III de la Convención, el Comité formulará una recomendación al Estado analizado para que considere adoptar las medidas necesarias tendientes a implementar a la brevedad las disposiciones de la Ley de Integridad en la Función Pública, así como la puesta en marcha de la Comisión de Integridad a que se refiere la sección 11 del mismo ordenamiento. (Véase recomendación de la sección 1.1.4 inciso c), del literal “A” del capítulo II de este informe).

[35] En tercer lugar, con base en la información recabada durante la visita *in situ* y la suministrada por Saint Kitts y Nevis en su respuesta al cuestionario, incluyendo las disposiciones de la Ley de Integridad en la Función Pública pendiente aún de implementación, el Comité denota la ausencia de normas que expresamente prevengan conflictos de intereses tras el cese en la función pública, tales como la prohibición a los ex funcionarios de intervenir en asuntos oficiales en los que hubieran participado durante sus mandatos o tratar con instituciones con las que hayan estado vinculados recientemente y, en general, otras situaciones que pudieran conducir al aprovechamiento inadecuado de su condición de ex funcionario. Teniendo en cuenta esta observación, el Comité formulará una recomendación. (Véase recomendación de la sección 1.1.4., inciso d), del literal “A” del capítulo II de este informe).

1.1.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

[36] Teniendo en cuenta la relativa reciente adopción de la Ley del Servicio Público de 2011, su Código de Conducta y Ética del Servicio Público de 2014, así como el estado aún pendiente de implementación de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2013, ordenamientos que en su conjunto prevén normas y mecanismos para la prevención de los conflictos de intereses, el Estado analizado no suministró información sobre los resultados en este campo.

[37] No obstante, Comité formulará las recomendaciones correspondientes que le permitan analizar, en su oportunidad, los resultados objetivos en cuanto la aplicación de las normas de conducta y de los mecanismos para prevenir los conflictos de intereses en Saint Kitts y Nevis con base en los “posibles indicadores que podrán ser considerados en relación con la implementación de las disposiciones de la

Convención seleccionadas para ser analizadas en la Primera Ronda” elaborados por la Secretaría Técnica del MESICIC y disponibles en el Portal Anticorrupción de las Américas^{12/}, teniendo en cuenta, además, que la Comisión del Servicio Público –órgano responsable de cumplir y hacer cumplir tales normas – no será analizado como uno de los órgano de control superior referidos en el literal “B” del capítulo II de este informe. (Véase recomendación de la sección 1.1.4, inciso e), y recomendaciones generales, incisos b) y c), del literal “A” del capítulo II de este informe).

1.1.4. Conclusiones y recomendaciones

[38] Saint Kitts y Nevis ha considerado y adoptado medidas para establecer, mantener y fortalecer normas de conducta orientadas a la prevención de conflictos de intereses y mecanismos para hacerlas cumplir, como se describió en la sección 1.1 del literal “A” del capítulo II de este informe.

[39] En vista de los comentarios que se expresaron en esa sección, el Comité sugiere que Saint Kitts y Nevis considere las siguientes recomendaciones:

- a) Diseñar e implementar un programa integral de capacitación dirigido a los servidores públicos y autoridades que vele por el cumplimiento del régimen descrito en la Ley del Servicio Público de 2011, en sus Códigos y Reglamento del Servicio Público de 2014, con el objeto de garantizar su adecuada difusión, manejo y aplicación. (Véase sección 1.1.2 del literal “A” del capítulo II de este informe).
- b) Diseñar e implementar campañas de difusión dirigidas a la totalidad de los servidores públicos sobre la existencia, naturaleza y alcance de la Ley del Servicio Público de 2011, sus Códigos y Reglamento del Servicio Público de 2014, haciendo énfasis en las disposiciones que deberán observar los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y las sanciones a las que serían objeto en caso de incumplimiento. (Véase sección 1.1.2 del literal “A” del capítulo II de este informe).
- c) Adoptar las medidas necesarias tendientes a implementar las disposiciones de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2013, así como para crear y conformar con la misma oportunidad la Comisión de Integridad a que se refiere la sección 11 de este ordenamiento y en la medida de lo posible, poner en práctica una política pública transversal en la materia, que considere la instalación de Comités de Ética internos, encargadas de dar cumplimiento y seguimiento a estas medidas. (Véase sección 1.1.2 del literal “A” del capítulo II de este informe).
- d) Establecer restricciones adecuadas para quienes se retiran del servicio público, tales como la prohibición de que intervenga como representante de un interés privado en asuntos en los que haya gestionado durante el desempeño de sus funciones oficiales, o restricciones para tratar con el órgano gubernamental en el que se desempeñó, durante un período razonable. (Véase sección 1.1.2 del literal “A” del capítulo II de este informe).

12. Disponibles en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mec_ind.pdf

- e) Elaborar información estadística en relación con los resultados objetivos en cuanto a la aplicación de las normas de conducta y mecanismos para prevenir conflictos de intereses, que permita determinar, entre otros aspectos, el número de casos en los que los análisis de antecedentes sirvieron para impedir el acceso a aspirantes inhabilitados para desempeñar funciones públicas; situaciones de conflictos de intereses detectadas durante el desempeño o con posterioridad al ejercicio de funciones públicas y medidas adoptadas para proteger los intereses oficiales; y las sanciones impuestas a los infractores, en orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas. (Véase sección 1.1.3 del literal “A” del capítulo II de este informe).

1.2. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA ASEGURAR LA PRESERVACIÓN Y EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

1.2.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

[40] Saint Kitts y Nevis cuenta con un conjunto de disposiciones relativas a las normas de conducta referidas, entre las que cabe destacar las siguientes:

[41] – Disposiciones de rango legal, como las contenidas en la Ley de Administración Financiera^{13/}, cuya sección 10 dispone que un funcionario público, salvo los funcionarios contables o aquellos funcionarios públicos a que se refiere la sección 9, que en el ejercicio de sus responsabilidades como funcionario público entre en posesión o control de (a) fondos públicos cuya intención sabe o tiene razón para creer que es la de ser pagados al gobierno o recibidos por él; o (b) sellos o valores propiedad del gobierno cuya intención es ser depositados o confiados al gobierno, deberá sin demora entregar los fondos, sellos o valores a un funcionario contable o a un delegado de un funcionario contable relacionado o responsable de ellos o al Contralor General. Esta sección también señala que un funcionario público o un funcionario contable o delegado de un funcionario contable a los que se hizo referencia previamente será responsable de cumplir este deber de manera acorde con esa subsección con diligencia y honradez y de no hacerlo se sujetará a medidas disciplinarias según la ley que corresponda.

[42] – Disposiciones normativas, como las contenidas en el Código de Conducta y Ética del Servicio Público que prevé normas para asegurar la conservación y uso adecuados de los recursos que se les confían a los funcionarios gubernamentales. Específicamente, la sección 9 del Código señala que los funcionarios procurarán asegurar el uso apropiado, eficaz y eficiente de los fondos públicos, y que serán responsables en este sentido de acuerdo con la Ley de Administración Financiera y el Reglamento formulado de acuerdo con dicha Ley.

[43] Asimismo, la sección 27 del Código establece que los funcionarios públicos serán responsables por cualquier equipo, herramientas u otros bienes gubernamentales bajo su custodia o que puedan llegar a estar bajo su control en el curso de sus deberes, y que de inmediato deberán reportar cualquier mal funcionamiento, daño o pérdida de cualquier equipo. Los funcionarios pueden ser responsables de cualquier pérdida de cualquier equipo, herramientas u otros bienes.

13. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_kna_fin_adm_act_06.pdf

[44] Saint Kitts y Nevis también cuentan con mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de estas normas, entre los que cabe destacar los siguientes:

[45] – La sección 82 constitucional, que establece la existencia de un Director de Auditoría quien, de conformidad con la sección 76, deberá estar convencido de que todos los fondos asignados por el Parlamento y desembolsados se han aplicado para los propósitos para los cuales se asignaron y que el gasto es acorde con la autoridad competente. El Director de Auditoría también tiene el deber por lo menos una vez al año de auditar y rendir informes sobre la contabilidad pública del gobierno, las contabilidades de todos los funcionarios y autoridades del gobierno, las contabilidades de todos los tribunales en Saint Kitts y Nevis (incluyendo las cuentas que mantenga en su territorio la Corte Suprema), las contabilidades de todas las comisiones y juntas establecidas por la Constitución y las contabilidades del Secretario de la Asamblea Nacional.

[46] – Disposiciones de rango legal, como las contenidas en la Ley de Auditoría¹⁴, cuya sección 7 prevé que el Director de Auditoría tiene la responsabilidad de presentarle un informe anual al Ministerio de Finanzas para su remisión subsiguiente a la Asamblea Nacional. Entre los asuntos que tiene a su cargo informar el Director de Auditoría se cuentan: (i) los resultados de su revisión de las cuentas anuales; (ii) si las cuentas y registros esenciales no se han mantenido adecuadamente o si los fondos públicos no se han contabilizado o pagado en su totalidad, cuando así lo requiera la ley, al Fondo Consolidado¹⁵, (iii) si las reglas y procedimientos aplicados han sido insuficientes para salvaguardar los fondos o bienes públicos, o para verificar eficazmente la evaluación, el cobro y la asignación adecuada de los ingresos, o para asegurar que los gastos solamente se efectuaron de acuerdo con la asignación y conforme con la autoridad competente; (iv) si los fondos se han gastado sin la debida consideración del valor por el dinero, si se han adquirido o utilizado recursos sin considerar suficientemente la economía y la eficiencia; si no se han establecido procedimientos satisfactorios para medir e informar sobre la eficacia de las actividades del gobierno.

[47] – Disposiciones de rango legal, como las contenidas en la Ley de Administración Financiera, cuya sección 6 dispone los deberes y las atribuciones del Secretario Financiero, quien es responsable de la supervisión del Departamento de Finanzas y de supervisar la preparación de las estimaciones anuales y suplementarias a nombre del Ministro de Finanzas. El Secretario Financiero desempeña un papel de supervisión sobre todos los ministerios gubernamentales en el sentido de que tiene en todo momento acceso a todos los ministerios, departamentos o lugares en que se lleva a cabo contabilidad por servicios o se mantienen registros contables y puede requerir que un funcionario público entregue cualquier información y suministre acceso a cualquier documento que considere necesario.

[48] Asimismo, la sección 7 de esa misma Ley establece la responsabilidad y las atribuciones del Contralor General, quien está a cargo de mantener las cuentas centrales del gobierno. Dos funciones pertinentes del Contralor General son mantener un sistema para la revisión de los pagos para asegurar que se hagan de conformidad con la Ley de Administración Financiera o los reglamentos y asegurar que en cada ministerio, departamento y servicio se disponga de un sistema adecuado de contabilidad, y que todo el dinero recibido y pagado por el gobierno se registre oportuna y adecuadamente en la contabilidad.

14. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_kna_aud_act_20.01.pdf

15. Ver la sección 69 constitucional, *supra* nota 5.

[49] Asimismo, la sección 8 de la Ley de Administración Financiera establece la designación y las responsabilidades de los funcionarios contables, quienes son designados por la Asamblea Nacional y son responsable del control y la contabilidad precisa y el desembolso de los fondos públicos, salvo los recursos para fines públicos recibidos por el ministerio, departamento o servicio del cual es el funcionario contable.

[50] – Disposiciones normativas, como las contenidas en el Código de Disciplina del Servicio Público^{16/} adoptado en 2014 de acuerdo con la sección 53(3)(c) de Ley del Servicio Público, que dispone que se observen las normas de conducta establecidas en la Ley, en cualquier reglamento expedido con base en la Ley o en el Código de Conducta y Ética del Servicio Público. Según el Código de Disciplina del Servicio Público, la malversación de fondos públicos y la pérdida o daño importantes de bienes se consideran como conducta indebida de carácter grave que puede ameritar despido si se determina la culpabilidad del funcionario público. La pérdida o daño de bienes que no se estiman importantes se consideran conducta indebida de carácter menor.

[51] El Comité observa también la Ley de Integridad en la Función Pública —que no ha entrado en vigor todavía— que prevé en su sección 27 que un funcionario público estará cometiendo un delito de abuso de funciones si, entre otras cosas, utiliza fondos o recursos públicos para fines privados, incluyendo propósitos partidistas, y se verá sujeto, en caso de condena, a una multa o a pena de privación de la libertad.

1.2.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

[52] Con respecto a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias referidas a normas y mecanismos para la conservación y el uso adecuados de los recursos públicos que examinó el Comité, con base en la información suministrada por Saint Kitts y Nevis en su respuesta al cuestionario y durante la visita *in situ*, conforman, colectivamente, un conjunto de medidas pertinentes para la promoción de los propósitos de la Convención.

[53] No obstante lo anterior, el Comité estima pertinente reiterar las consideraciones expresadas en la sección 1.1.2 del literal “A” del capítulo II de este informe, en cuanto a la conveniencia de que el Estado analizado considere diseñar e implementar campañas de difusión dirigidas a la totalidad de los servidores públicos sobre la existencia, naturaleza y alcance, en este caso particular, de las disposiciones contenidas en los Códigos de Conducta y Ética y de Disciplina del Servicio Público referidos anteriormente, en cuanto a la obligación que tienen de asegurar tanto la preservación como el uso adecuado de los recursos que se les asignan en el desempeño de sus funciones, así como importancia y la trascendencia de redoblar esfuerzos para la pronta implementación de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2013 y la institucionalización de la Comisión de Integridad a que se refiere esta Ley.

1.2.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

[54] En lo que respecta al análisis de los resultados en este campo, el Comité nuevamente tiene en cuenta la relativa reciente adopción de la Ley del Servicio Público de 2011 y sus Códigos de Conducta y Ética y de Disciplina del Servicio Público, ambos de 2014, así como el estado pendiente de implementación de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2013, ordenamientos que, como

16. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_kna_pub_serv_so_9_2014.pdf

quedó señalado, prevén normas de conducta y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento tendientes a asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los servidores públicos en el desempeño de sus funciones.

[55] No obstante, Comité formulará las recomendaciones correspondientes que le permitan analizar, en su oportunidad, los resultados objetivos en cuanto la aplicación de dichas normas y mecanismos con base en los “posibles indicadores que podrán ser considerados en relación con la implementación de las disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en la Primera Ronda”^{17/} elaborados por la Secretaría Técnica del MESICIC y disponibles en el Portal Anticorrupción de las Américas, teniendo en cuenta, además, que la Comisión del Servicio Público –órgano responsable de cumplir y hacer cumplir tales normas – no será analizado como uno de los órgano de control superior referidos en el literal “B” del capítulo II de este informe. (Véase recomendación de la sección 1.2.4, inciso a), y recomendaciones generales, incisos b) y c), del literal “A” del capítulo II de este informe).

[56] Asimismo, en cuanto a las funciones y responsabilidades del Director de Auditoría descritas en la sección 1.2.1 del literal “A” del capítulo II de este informe, el Comité no logró identificar la forma ni medios en que este órgano de control hace públicos y accesibles a los ciudadanos los informes de auditoría que por mandato constitucional y legal debe presentar anualmente a la Asamblea Nacional, por lo que, en aras de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en cuanto al manejo de los recursos públicos en el Estado analizado, el Comité formulará una recomendación, teniendo en cuenta además, que el Director de Auditoría no será analizado como uno de los órgano de control superior referidos en el literal “B” del capítulo II de este informe. (Véase recomendación de la sección 1.2.4, incisos b) y c), del literal “A” del capítulo II de este informe).

1.2.4. Conclusiones y recomendaciones

[57] Saint Kitts y Nevis ha considerado y adoptado medidas para establecer, mantener y fortalecer normas de conducta diseñadas para asegurar la conservación y uso adecuados de los recursos que se les confían a los funcionarios gubernamentales en el desempeño de sus funciones, así como mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento, como se indicó en la sección 1.2 del literal “A” del capítulo II de este informe.

[58] En vista de los comentarios que se expresaron en esa sección, el Comité sugiere que Saint Kitts y Nevis considere las siguientes recomendaciones:

- a) Elaborar información estadística en relación con los resultados objetivos en cuanto a la aplicación de las normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, que permita determinar, entre otros aspectos, el número de casos en los que se detectaron infracciones a dichas normas; número y tipo de sanciones impuestas a los infractores; medidas adoptadas para buscar el resarcimiento de los perjuicios causados al erario público y los resultados de dichas medidas referentes a los montos de los resarcimientos o de las sumas de lo efectivamente recuperado, en orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas. (Véase sección 1.2.3 del literal “A” del capítulo II de este informe).

17. Véase *supra* nota 11.

- b) Elaborar información estadística en relación con los resultados en el desempeño de las funciones y responsabilidades del Director de Auditoría, a través de la realización de los diferentes tipos de auditoría que adelanta, que permita determinar, además del número de auditorías finalizadas, cuántas se encuentran en curso; cuántas se encuentran suspendidas por cualquier razón; y cuántas han hecho curso hacia la instancia competente para adoptar la decisión a que haya lugar, en orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas. (Véase sección 1.2.3 del literal “A” del capítulo II de este informe).
- c) Elaborar materiales o contenidos en lenguaje sencillo, que sean dirigidos a servidores públicos con el objeto de difundir y explicar la normatividad en materia de conservación y uso adecuado de los recursos públicos, para contribuir a su cumplimiento. (Véase sección 1.2.3 del literal “A” del capítulo II de este informe).

1.3. MEDIDAS Y SISTEMAS PARA EXIGIR A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS INFORMAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES SOBRE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LOS QUE TENGAN CONOCIMIENTO

1.3.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

[59] Saint Kitts y Nevis cuenta con un conjunto de disposiciones relativas a las medidas y sistemas referidos, entre las que cabe destacar las siguientes:

[60] – Disposiciones normativas, como las contenidas en el Código de Conducta y Ética del Servicio Público de 2014 adoptado de conformidad con la sección 53(3)(c) de la Ley del Servicio Público de 2011, que establece en su sección 55(1) que cuando un funcionario considera que se le está solicitando actuar de una manera ilícita, inapropiada o no ética; que infringe una convención o código profesional aceptado; que puede involucrar posible mala administración; o que de alguna otra manera es incongruente con el Código, está obligado a informar sobre ello de acuerdo con los procedimientos establecidos en los lineamientos correspondientes o reglas de conducta de su ministerio o departamento o de conformidad con las disposiciones de la ley aplicable. Asimismo, la sección 55(2) del Código requiere que un funcionario informe a su Jefe de Departamento o, si el asunto involucra al Jefe de Departamento, al Jefe del Servicio Público, evidencias de acciones delictivas o ilícitas de terceros, de acuerdo con los procedimientos pertinentes; o casos de infracciones del Código de que tenga conocimiento.

[61] Adicionalmente, la sección 56 del Código establece que si el funcionario que notificó sobre el asunto opina que la respuesta no representa una respuesta razonable a las inquietudes planteadas, puede enviar un informe por escrito directamente a la Comisión del Servicio Público. Asimismo, la sección 57 señala que cualquier caso de conducta indebida para el cual no se establece ninguna disposición en el Código será notificado al Jefe de Personal (el Secretario Permanente del Departamento de Recursos Humanos), quien se hará cargo de la conducta indebida de una manera aprobada por la Comisión del Servicio Público.

[62] Saint Kitts y Nevis también cuenta también con mecanismos para hacer cumplir las normas a que se hizo referencia *supra*, entre los que cabe destacar las siguientes:

[63] – La Comisión del Servicio Público, establecida de acuerdo con la sección 77 constitucional, la cual, como quedó señalado en la sección 1.1.1 del literal “A” del capítulo II de este informe, tiene la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir el régimen descrito en la Ley del Servicio Público 2011 y los reglamentos expedidos con base en dicha Ley, como el Código de Conducta y Ética del Servicio Público a que se hizo referencia *supra*.

[64] Específicamente, la sección 60(2) del Código de Conducta y Ética del Servicio Público dispone que una persona que incumple la disposición de la sección 55(2) descrita previamente estará incurriendo en conducta indebida considerada “conducta indebida de naturaleza grave” dentro de la definición de la sección 2 del Código de Disciplina del Servicio Público, y se verá sujeta a la sanción para la conducta indebida especificada en el mismo Código.

1.3.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

[65] Con respecto a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que abordan las medidas que requieren que los servidores públicos informen a las autoridades competentes sobre prácticas corruptas en el desempeño de las funciones públicas de las que tengan conocimiento que examinó el Comité, con base en la información suministrada por Saint Kitts y Nevis en su respuesta al cuestionario y durante la visita *in situ*, conforman, colectivamente, un conjunto de medidas pertinentes para la promoción de los propósitos de la Convención.

[66] No obstante, el Comité estima pertinente reiterar las consideraciones expresadas en las secciones 1.1.2 y 1.2.2 del literal “A” del capítulo II de este informe, en cuanto a la conveniencia de que el Estado analizado considere diseñar e implementar campañas de difusión dirigidas a la totalidad de los servidores públicos sobre la existencia, naturaleza y alcance, en este caso particular, de las disposiciones contenidas en el Código de Conducta y Ética del Servicio Público, en cuanto a la obligación que tienen los funcionarios públicos de informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción de los que tengan conocimiento.

[67] Asimismo, y en aras promover la efectividad del régimen relativo a dicha obligación, el Comité considera conveniente que el mismo podría verse fortalecido a través de la inclusión de medidas que faciliten su cumplimiento mediante el empleo de formularios y de medios informáticos y de comunicación que sirvan para alentar a los servidores públicos a formular tales denuncias, así como la adopción de medidas que ofrezcan garantías a los denunciantes frente a las amenazas, retaliaciones o represalias de las que puedan ser objeto como consecuencia del cumplimiento de este deber. Al respecto, el Comité formulará recomendaciones. (Véase recomendaciones de la sección 1.3.4, incisos a) y b), del literal “A” del capítulo II de este informe).

1.3.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

[68] En lo que respecta al análisis de los resultados en este campo, el Comité nuevamente tiene en cuenta la relativa reciente adopción de la Ley del Servicio Público de 2011 y sus Códigos de Conducta y Ética y de Disciplina del Servicio Público, ambos de 2014, ordenamientos que, como quedó señalado, prevén medidas que exigen a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.

[69] No obstante, Comité formulará las recomendaciones correspondientes que le permitan analizar, en su oportunidad, los resultados objetivos en cuanto la aplicación de dichas medidas con base en los “posibles indicadores que podrán ser considerados en relación con la implementación de las disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en la Primera Ronda”^{18/} elaborados por la Secretaría Técnica del MESICIC y disponibles en el Portal Anticorrupción de las Américas, teniendo en cuenta, además, que la Comisión del Servicio Público –órgano responsable de cumplir y hacer cumplir tales normas – no será analizado como uno de los órgano de control superior referidos en el literal “B” del capítulo II de este informe. (Véase recomendación de la sección 1.2.4, incisos d) y e), y recomendaciones generales, incisos b) y c), del literal “A” del capítulo II de este informe).

1.3.4. Conclusiones y recomendaciones

[70] **Saint Kitts y Nevis ha considerado y adoptado medidas para establecer, mantener y fortalecer las normas de conducta y mecanismos atinentes a las medidas y sistemas que exigen a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento, como se describió en la sección 1.3 del literal “A” del capítulo II de este informe.**

[71] En vista de los comentarios que se expresaron en esa sección, el Comité sugiere que Saint Kitts y Nevis considere las siguientes recomendaciones:

- a) Adoptar las medidas necesarias tendientes a facilitar el cumplimiento de la obligación de denunciar mediante el empleo de formatos y de medios informáticos y de comunicación que sirvan para alentar a los servidores públicos a formular tales denuncias y que ayuden a simplificar su presentación. (Véase sección 1.3.2 del literal “A” del capítulo II de este informe).
- b) Adoptar las medidas necesarias que garanticen protección a los funcionarios públicos que denuncien actos de corrupción frente a las amenazas o represalias de las que puedan ser objeto como consecuencia del cumplimiento de este deber. (Véase sección 1.3.2 del literal “A” del capítulo II de este informe).
- c) Adoptar las medidas necesarias que permitan asegurar la adecuada confidencialidad de la información derivada de la presentación de quejas y denuncias relacionadas con presuntos actos de corrupción, así como salvaguardar la identidad del denunciante y proteger los datos personales. (Véase sección 1.3.2 del literal “A” del capítulo II de este informe).
- d) Elaborar información estadística en relación con los resultados objetivos en cuanto a la implementación de las normas de conducta, medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento, que permita determinar, entre otros aspectos, el número de casos de corrupción denunciados por funcionarios públicos, medios utilizados por los mismos para interponer las denuncias, tales como por escrito o por vía electrónica o telefónica; medidas adoptadas para su protección y las sanciones impuestas a los infractores al deber de denunciar, en orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas. (Véase sección 1.3.3 del literal “A” del capítulo II de este informe).

18. Véase *supra* nota 11.

- e) Implementar campañas de difusión al interior de las instituciones gubernamentales y hacia la población en general, sobre los diversos mecanismos y canales existentes para la presentación de quejas y denuncias relacionadas con presuntos actos de corrupción, privilegiando el uso de medios electrónicos y formatos estandarizados. (Véase sección 1.3.3 del literal “A” del capítulo II de este informe).

2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN)

2.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[72] Saint Kitts y Nevis cuenta con un conjunto de disposiciones respecto a estos sistemas, entre las que cabe señalar las siguientes:

[73] – Disposiciones de rango legal, como las contenidas en las secciones 5 y 6(1) de la Ley de Integridad en la Función Pública 2013 —que no ha entrado en vigor—, que prevén que una persona que, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, es funcionario público¹⁹, deberá, dentro de un plazo que se prescribirá mediante una Orden, completar y presentar una declaración en el Formulario de la Cuarta Cláusula ante la Comisión de Integridad —que no se ha establecido todavía— en la que declare sus ingresos, activos, pasivos, intereses privados y obsequios en efectivo o en especie que reciba él mismo o su cónyuge o sus hijos dependientes y en lo sucesivo el funcionario público deberá en cada año subsiguiente en que continúe siendo funcionario público presentar declaraciones adicionales.

[74] De conformidad con la sección 6(2), cuando un funcionario público tenga dinero o bienes en fideicomiso o conjuntamente con otra persona, deberá incluirlo en su declaración, pero no se requiere que revele los términos del fideicomiso. Asimismo, de acuerdo con la sección 6(4), cuando un funcionario público declara un ingreso insuficiente para respaldar la acreditación en valor de los activos netos declarados de tal manera que se genere una inferencia de que debe haber habido otros ingresos que expliquen el grado de la adquisición de tales activos, se considerará que el funcionario público tuvo en su posesión dichos ingresos que no se han declarado y será su responsabilidad establecer la fuente de esos otros ingresos.

[75] La sección 7 de la Ley de Integridad en la Función Pública permite que las personas en la función pública coloquen sus activos o parte de ellos en un fideicomiso ciego. Cuando los activos se colocan en un fideicomiso ciego, solamente será necesario declarar el monto y la descripción de los activos.

[76] Las declaraciones presentadas ante la Comisión de Integridad y los registros de la Comisión con respecto a dichas declaraciones son secretos y confidenciales y no se harán públicos excepto si se requiere que una declaración o registro concreto se entregue para propósitos o en conexión con cualquier proceso judicial contra el declarante o averiguación con respecto al mismo según la Ley de Integridad en la Función Pública, la Ley de la Comisión Investigadora o perjurio según la Ley de Perjurio²⁰.

19. “Funcionario público” significa un funcionario de los especificados en la Primera Cláusula de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2013.

20. Véase sección 40 de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2013.

[77] La sección 8 le asigna a la Comisión de Integridad la tarea de examinar todas las declaraciones que se le entregan y podrá solicitar cualquier información o explicación pertinente para una declaración dentro del plazo de un mes o cualquier plazo mayor que especifique cualquier solicitud de este tipo de la Comisión^{21/}. Cuando tras tal examen la Comisión de Integridad está convencida de que la declaración se ha presentado en su totalidad, publicará una certificación en la *Gazette* en la forma que se establece en la Quinta Cláusula.

[78] Según la sección 23, de conformidad con su deber de hacer indagaciones cuando sea necesario en relación con las declaraciones, la Comisión puede nombrar a uno o más de los miembros de su personal para investigar el asunto. La persona o personas empleadas para investigar el asunto pueden solicitarle al funcionario público o a cualquier persona que posea información que comparezca ante el investigador y entregue la información y los documentos que sean necesarios. Cuando un investigador tenga causas razonables para creer que se ha infringido la Ley o que hay bases razonables para creer que un funcionario público tiene en su posesión bienes desproporcionados a sus fuentes pasadas o presentes de ingresos o activos y por los cuales no existe una explicación razonable, la Comisión lo informará a la Oficina del Fiscal General para que tome medidas adicionales.

[79] De conformidad con la sección 25, si la Oficina del Fiscal General tiene bases razonables para creer que es necesaria una investigación de los activos e ingresos del funcionario público, podrá solicitarle a un juez en sala a nombre de la Comisión que emita una orden de investigación.

[80] Por último, la Ley de Integridad en la Función Pública establece sanciones para quienes incumplen sus disposiciones con respecto a las declaraciones de los activos, ingresos y pasivos. Según la sección 29, un funcionario público o cualquier otra persona que obstruya o no ayude a la Comisión a ejercer las atribuciones que le confieren las secciones 23(2) y 24; o que le proporcione información falsa o engañosa a la Comisión, estará cometiendo un delito y se verá sujeto, en caso de condena, a una multa no mayor de EC \$15.000^{22/} o a pena de privación de la libertad no mayor de dos años. Por otra parte, la sección 30 dispone, entre otras cosas, como la no entrega de información, que una persona que sin causa razonable no le entrega a la Comisión de Integridad una declaración o detalles adicionales sobre la misma que se le solicite que entregue de conformidad con la Ley, estará cometiendo un delito, y se verá sujeto, en caso de condena, a una multa de no más de EC \$30.000^{23/} o a pena de privación de la libertad de no más de cinco años.

2.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[81] El Comité, con base en la información que ha examinado, considera que Saint Kitts y Nevis cuenta con disposiciones que, aunque están pendientes de implementación, están destinadas a crear, mantener y fortalecer sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de quienes desempeñan funciones públicas, las cuales, una vez implementadas, podrían considerarse pertinentes para la promoción de los propósitos de la Convención.

[82] Por ello, el Comité insiste en la importancia y transcendencia de que el Estado analizado redoble esfuerzos en cuanto a la adopción de las medidas jurídicas, administrativas y presupuestarias que considere necesarias para la pronta implementación de las normas contenidas en la Ley de Integridad en la Función Pública de 2013, así como para crear y conformar a la brevedad la Comisión de Integridad a que se refiere la sección 11 de este ordenamiento, teniendo en cuenta, sobre todo, las

21. Véase sección 9 de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2013.

22. Véase *supra* nota 10.

23. Véase *supra* nota 10.

atribuciones substanciales que la misma Ley le confiere a dicha Comisión para prevenir, detectar y sancionar prácticas corruptas, y por ello reitera su recomendación formulada en la sección 1.4.1, inciso c), del literal “A” del capítulo II de este informe.

[83] Asimismo y sin perjuicio de lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar las siguientes observaciones en aras de fortalecer el marco legislativo con que se cuenta actualmente:

[84] En primer lugar, el Comité estima necesario que el Estado analizado considere, con sujeción a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno, regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes en que corresponda dar publicidad a las declaraciones de los ingresos, activos y pasivos por parte de quienes desempeñan funciones públicas, y en tal sentido formulará una recomendación teniendo en cuenta que la Convención se refiere expresamente a la publicación de tales declaraciones “*cuando corresponda*”. (Véase recomendación de la sección 2.4, inciso a), del literal “A” del capítulo II de este informe).

[85] En segundo lugar, si bien el sistema para la presentación de declaraciones patrimoniales no se ha implementado efectivamente, el Comité denota, con base en lo descrito en la sección anterior, que la presentación de las declaraciones se haría a través de formularios impresos. En este sentido, y a fin de facilitar la presentación, así como la labor de la Comisión de Integridad en la revisión del contenido de estas declaraciones, el Comité estima que Saint Kitts y Nevis podría considerar poner a disposición medios electrónicos para completar la declaración y entregarla a la Comisión de Integridad. (Véase recomendación de la sección 2.4, inciso b), del literal “A” del capítulo II de este informe).

[86] En tercer lugar, como quedó indicado en la sección anterior, la Ley de Integridad en la Función Pública contempla la obligación que tiene el funcionario público de declarar el estado de su patrimonio al ingresar al servicio público y en cada año sucesivo mientras continúe siéndolo. Sin embargo, con base en la información a su disposición, el Comité no identificó disposiciones que incluyan plazos y circunstancias razonables que exijan a los mismos servidores públicos la presentación de su declaración de ingresos, activos y pasivos al cese de sus funciones, por lo que el Comité formulará una recomendación en este sentido. (Véase recomendación de la sección 2.4, inciso c), del literal “A” del capítulo II de este informe).

[87] Finalmente, el Comité observa que la única sanción que prescribe la ley para quienes no presentan su declaración de activos es una sanción penal. El Comité estima que es importante que Saint Kitts y Nevis contemple imponer sanciones administrativas para quienes no cumplen con su obligación de declarar sus activos, ingresos y pasivos, así como para quienes no le entregan a la Comisión de Integridad información adicional dentro de un plazo especificado cuando se les solicite; estas sanciones podrían incluir retención de sueldo y, para aquellos que se han separado del servicio público, multas e inhabilitación de cualquier puesto público en tanto no se haya presentado la declaración de activos final. (Véase recomendación de la sección 2.4, inciso d), del literal “A” del capítulo II de este informe).

2.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

[88] Teniendo en cuenta el estado pendiente de implementación de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2013, que prevé las disposiciones sobre las declaraciones de los ingresos, activos y pasivos por parte de quienes desempeñan funciones públicas, el Estado analizado no suministra información sobre los resultados en este campo.

[89] En este sentido, Comité formulará la recomendación correspondiente que le permitan analizar, en su oportunidad, los resultados objetivos en cuanto la aplicación de dichas disposiciones con base en los “posibles indicadores que podrán ser considerados en relación con la implementación de las disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en la Primera Ronda”^{24/} elaborados por la Secretaría Técnica del MESICIC y disponibles en el Portal Anticorrupción de las Américas. (Véase recomendación de la sección 2.4, inciso e), y recomendaciones generales, incisos b) y c), del literal “A” del capítulo II de este informe).

2.4. Conclusiones y recomendaciones

[90] **Saint Kitts y Nevis ha considerado y está en proceso de implementar medidas para establecer, mantener y fortalecer sistemas para el registro de ingresos, activos y pasivos de las personas que desempeñan funciones públicas en ciertos cargos que especifica la ley, como se indicó en la sección 2 del literal “A” del capítulo II de este informe.**

[91] En vista de los comentarios que se expresaron en esa sección, el Comité sugiere que Saint Kitts y Nevis considere las siguientes recomendaciones:

- a) Considerar enmendar la Ley de Integridad en la Función Pública 2013, con miras a reglamentar las condiciones, procedimientos y otros aspectos pertinentes con respecto a la publicidad de las declaraciones de activos, ingresos y pasivos, de conformidad con los principios fundamentales del sistema jurídico de Saint Kitts y Nevis. (Véase sección 2.2 del literal “A” del capítulo II de este informe).
- b) Desarrollar y poner a disposición de los funcionarios públicos los medios o sistemas electrónicos necesarios que faciliten la presentación y entrega de la declaración patrimonial ante la Comisión de Integridad. (Véase sección 2.2 del literal “A” del capítulo II de este informe).
- c) Considerar adoptar disposiciones que incluyan plazos y circunstancias razonables que exijan a los funcionarios públicos la presentación de declaraciones de ingresos, activos y pasivos al cese de sus funciones. (Véase sección 2.2 del literal “A” del capítulo II de este informe).

24. Véase *supra* nota 11.

- d) Considerar el establecimiento de sanciones administrativas para quienes incumplan la obligación de presentar una declaración de ingresos, activos y pasivos; o consignen información incompleta, inexacta o falsa; así como para quienes, tras solicitud al efecto, no le presenten a la Comisión de Integridad la información adicional dentro de un plazo predeterminado; las mencionadas sanciones pueden incluir la retención salarial y, para aquellos que hayan dejado el servicio público, multas e inhabilitaciones para ocupar cargos públicos hasta tanto se presente la declaración final de activos. (Véase sección 2.2 del literal “A” del capítulo II de este informe).
- e) Elaborar información estadística en relación con los resultados objetivos en cuanto a la aplicación de las disposiciones sobre las declaraciones de los ingresos, activos y pasivos por parte de quienes desempeñan funciones públicas que permita determinar, entre otros aspectos, el número de casos en los que la verificación, la evaluación o el análisis de la información suministrada en la declaración permitió detectar la incursión de servidores públicos en actos de corrupción; acciones iniciadas con base en ello y el resultado de las mismas; así como las sanciones impuestas a los infractores a las normas relativas a la presentación de las declaraciones, por incurrir en faltas tales como su no presentación, o su presentación extemporánea, imprecisa e/o incompleta. (Véase sección 2.3 del literal “A” del capítulo II de este informe).

3. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO III DE LA CONVENCIÓN)

3.1. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN EN GENERAL

3.1.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[92] Saint Kitts y Nevis cuenta con un conjunto de disposiciones constitucionales que consagran principios, derechos y garantías individuales que permiten, facilitan y protegen la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a combatir la corrupción, tales como las secciones 12 y 13 constitucionales protegen expresamente las libertades de expresión y reunión, respectivamente.

3.1.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[93] El Comité, con base en la información que tuvo a su disposición, señala que en Saint Kitts y Nevis cuenta con disposiciones constitucionales que protegen y promueven libertades y derechos fundamentales de las personas, lo que constituye una base importante para que la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales operen libre e independientemente, facilitando así su participación en la prevención de la corrupción.

[94] Sin embargo, el Comité, de acuerdo con lo expresado por el Estado analizado en su respuesta al cuestionario^{25/}, así como de la información recabada durante la visita *in situ*, denota también la ausencia de un marco jurídico destinado a estimular tal participación, sin perjuicio de la vigencia de algunas legislaciones y políticas gubernamentales que prevén cierto tipo de mecanismos de consulta a

25. Véase respuesta de Saint Kitts y Nevis al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 14, *supra* nota 4.

determinadas personas o grupos de personas (*stakeholders*) que podrían contribuir en la lucha contra la corrupción.

[95] En este sentido y en atención a la clasificación a que se refiere la metodología^{26/} para el análisis de la implementación del artículo III, párrafo 11, de la Convención, en cada uno de los apartes correspondientes, el Comité expresará algunas consideraciones y formulará algunas recomendaciones específicas en relación con esta materia.

3.1.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

[96] El Estado analizado no suministra información sobre los resultados en este campo, por lo tanto, no es procedente hacer una valoración integral al respecto.

3.2. MECANISMOS PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

3.2.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[97] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado señala que *“No existe legislación general que rija el acceso a la información. La información normalmente se pone a disponibilidad de acuerdo con la política específica del departamento gubernamental correspondiente. Cuando existen dificultades de acceso a la información se puede solicitar la asistencia del Ombudsman para obtenerla.”*^{27/}

3.2.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[98] Con base en lo señalado en la sección anterior, el Comité formulará un conjunto de recomendaciones al Estado analizado tendientes a considerar el establecimiento de normas y mecanismos que promuevan, regulen y faciliten el acceso a la información en poder o bajo el control de las instituciones públicas, teniendo en cuenta que la posibilidad de obtener esa información es, entre otros aspectos, condición indispensable para que la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales puedan participar en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción. (Véase recomendaciones de la sección 3.2.4 incisos a), b) y c), del literal “A” del capítulo II de este informe).

[99] No obstante lo anterior, el Comité, con base en la información que le fue puesta de presente por los representantes del Estado analizado, así como de las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado con ocasión de la visita *in situ*, reconoce la existencia^{28/} de políticas que en ciertos ministerios, departamentos y oficinas públicas vienen facilitando a los ciudadanos que así la soliciten, información y documentos en su poder. Sin embargo, en la misma oportunidad, los representantes del Estado analizado señalaron que la ausencia de equipos y sistemas informáticos para la administración de documentos, dificulta la entrega de información de manera eficiente y oportuna. En este sentido y en aras de fortalecer los mecanismos con los que cuenta Saint Kitts y Nevis en materia de acceso a la

26. Véase el capítulo V de la “Metodología para el Análisis de la Implementación de las Disposiciones de la Convención seleccionadas en el marco de la Primera Ronda”, (SG/MESICIC/doc.21/02), disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/segu_metod.htm#_ftn1

27. Véase respuesta de Saint Kitts y Nevis al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 14, *supra* nota 4.

28. El 13 de marzo de 2015, el Estado analizado suministró el capítulo 23:19 de la Ley Nacional de Registros y Archivos, que establece la política y la responsabilidad en relación con los documentos públicos. Esta Ley está disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_kna.htm.

información pública, el Comité formulará una recomendación. (Véase recomendaciones de la sección 3.2.4 incisos d) y e), del literal “A” del capítulo II de este informe).

[100] Finalmente, el Comité desea reconocer la voluntad en el Estado analizado para avanzar en la implementación de mecanismos para el acceso a la información, la cual ha sido puesta de presente durante la visita *in situ*, al compartir el proyecto de Ley de Libertad de Información de 2006, señalando, al respecto, que su pronta aprobación y promulgación constituye una de las prioridades del Gobierno.

3.2.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

[101] El Estado analizado no suministra información sobre los resultados en este campo, por lo tanto, no es posible hacer una valoración integral al respecto. Consecuentemente, el Comité formulará las recomendaciones correspondientes. (Véase recomendaciones generales, incisos b) y c), del literal “A” del capítulo II de este informe).

3.2.4. Conclusiones y recomendaciones

[102] **Saint Kitts y Nevis todavía no ha considerado y adoptado medidas orientadas a establecer, mantener y fortalecer mecanismos para el acceso a la información, como se indicó en la sección 3.2 del literal “A” del capítulo II de este informe.**

[103] En vista de los comentarios que se expresaron en esa sección, el Comité sugiere que Saint Kitts y Nevis considere las siguientes recomendaciones:

- a) Considerar desarrollar instrumentos normativos que promuevan, regulen y faciliten el acceso a la información en poder o bajo el control de las instituciones públicas, con las excepciones prescritas por la ley; e instrumentos que les proporcionen a todas las personas el derecho de solicitar información, consultar documentos en posesión o bajo el control de las instituciones públicas y que son relativos a medidas oficiales, y el derecho de solicitar una copia de los mismos, con excepción de los casos protegidos por la ley. (Véase sección 3.2.2 del literal “A” del capítulo II de este informe).
- b) Considerar desarrollar instrumentos que establezcan reglas, acciones y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de órganos y entidades gubernamentales, que dispongan lo siguiente: agencia garante, entidades obligadas, procedimiento para solicitar la información, plazos de respuesta y posibles sanciones por la negativa de proveer la información. (Véase sección 3.2.2 del literal “A” del capítulo II de este informe).
- c) Implementar programas de capacitación y divulgación con respecto a los mecanismos de acceso a la información y la importancia del ejercicio de este derecho, a fin de facilitar su comprensión para los servidores públicos y los ciudadanos. (Véase sección 3.2.2 del literal “A” del capítulo II de este informe).

- d) Considerar desarrollar instrumentos que establezcan las disposiciones, acciones y procedimientos de observancia general, para la administración, organización y conservación de la información y documentos en poder o bajo el control de las instituciones públicas. (Véase sección 3.2.2 del literal “A” del capítulo II de este informe).
- e) Fomentar el uso de tecnología disponible para facilitar el acceso a la información pública y para fortalecer la transparencia en distintos ámbitos de la actividad gubernamental, de manera proactiva. (Véase sección 3.2.2 del literal “A” del capítulo II de este informe).

3.3. MECANISMOS DE CONSULTA

3.3.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[104] En su respuesta al cuestionario^{29/}, Saint Kitts y Nevis señala que: *“No existe legislación general que rija la consulta con la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales. En legislación específica pueden incluirse disposiciones que requieran que la autoridad o el funcionario público haga consultas.”*

3.3.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[105] El Comité, con base en la información que tuvo a su disposición y la recabada durante la visita *in situ*, y toda vez que el Estado analizado no cuenta con un marco jurídico que permita a quienes desempeñan funciones públicas solicitar y recibir reacciones de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales, formulará las recomendaciones correspondientes. (Véase recomendaciones de la sección 3.3.4 incisos a) y b), del literal “A” del capítulo II de este informe).

3.3.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

[106] El Estado analizado no suministra información sobre los resultados en este campo, por lo tanto, no es posible hacer una valoración integral al respecto. Consecuentemente, el Comité formulará las recomendaciones correspondientes. (Véase recomendaciones generales, incisos b) y c), del literal “A” del capítulo II de este informe).

3.3.4. Conclusiones y recomendaciones

[107] **Saint Kitts y Nevis todavía no ha considerado y adoptado medidas orientadas a establecer, mantener y fortalecer mecanismos de consulta, como se indica en la sección 3.3 del literal “A” del capítulo II de este informe.**

[108] En vista de los comentarios que se expresaron en esa sección, el Comité sugiere que Saint Kitts y Nevis considere las siguientes recomendaciones:

29. Véase respuesta de Saint Kitts y Nevis al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 15, *supra* nota 4.

- a) Establecer mecanismos de consulta que permitan a las organizaciones no gubernamentales y a la sociedad civil emitir opiniones y propuestas que puedan ser tomadas en cuenta para prevenir, detectar, investigar y sancionar la corrupción o para mejorar la toma de decisiones en la solución de problemas públicos. (Véase sección 3.3.2 del literal “A” del capítulo II de este informe).
- b) Diseñar e implementar programas para difundir los mecanismos de consulta y la capacitación necesaria para la efectiva implementación de esos mecanismos. (Véase sección 3.3.2 del literal “A” del capítulo II de este informe).

3.4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA

3.4.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[109] En su respuesta al cuestionario^{30/}, Saint Kitts y Nevis señala que: *“No existen mecanismos formales para la participación activa de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales en el proceso de formulación de políticas públicas y toma de decisiones a fin de cumplir con los fines de prevenir, detectar, sancionar y erradicar prácticas corruptas. Sin embargo, es política del gobierno consultar a las partes interesadas en el proceso legislativo. A las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales relevantes se les da la oportunidad de revisar y ofrecer comentarios sobre la legislación.”*

3.4.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[110] El Comité, con base en la información que tuvo a su disposición y la recabada durante la visita *in situ*, y toda vez que el Estado analizado no cuenta con un marco jurídico que estimule la participación activa de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los procesos de adopción de políticas y decisiones públicas, formulará las recomendaciones correspondientes. (Véase recomendaciones de la sección 3.4.4 incisos a) y b), del literal “A” del capítulo II de este informe).

3.4.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

[111] El Estado analizado no suministra información sobre los resultados en este campo, por lo tanto, no es posible hacer una valoración integral al respecto. Consecuentemente, el Comité formulará las recomendaciones correspondientes. (Véase recomendaciones generales, incisos b) y c), del literal “A” del capítulo II de este informe).

3.4.4. Conclusiones y recomendaciones

[112] **Saint Kitts y Nevis todavía no ha considerado y adoptado medidas orientadas a establecer, mantener y fortalecer mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales en la gestión pública, como se indicó en la sección 3.4 del literal “A” del capítulo II de este informe.**

30. Véase respuesta de Saint Kitts y Nevis al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 15, *supra* nota 4.

[113] En vista de los comentarios que se expresaron en esa sección, el Comité sugiere que Saint Kitts y Nevis considere las siguientes recomendaciones:

- a) Desarrollar, tomando en cuenta su régimen jurídico interno, normas y procedimientos que establezcan, mantengan y fortalezcan mecanismos para estimular la participación en la gestión pública de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los procesos de adopción de políticas y decisiones públicas como parte de los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción. (Véase sección 3.4.2 del literal “A” del capítulo II de este informe).
- b) Diseñar e implementar programas específicos tendientes a dar publicidad a los mecanismos disponibles para estimular la participación de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales en la gestión pública. (Véase sección 3.4.2 del literal “A” del capítulo II de este informe).

3.5. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN EN EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

3.5.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[114] En su respuesta al cuestionario^{31/}, Saint Kitts y Nevis señala que: “*No se dispone de mecanismos formales.*”

3.5.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[115] El Comité, con base en la información que tuvo a su disposición y la recabada durante la visita *in situ*, y toda vez que el Estado analizado no cuenta con un marco jurídico que permita la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en el seguimiento de la gestión pública, con el fin de lograr los propósitos de prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción, formulará las recomendaciones correspondientes. (Véase recomendaciones de la sección 3.5.4 incisos a) y b), del literal “A” del capítulo II de este informe).

3.5.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

[116] El Estado analizado no suministra información sobre los resultados en este campo, por lo tanto, no es posible hacer una valoración integral al respecto. Consecuentemente, el Comité formulará las recomendaciones correspondientes. (Véase recomendaciones generales, incisos b) y c), del literal “A” del capítulo II de este informe).

3.5.4. Conclusiones y recomendaciones

[117] **Saint Kitts y Nevis todavía no ha considerado y adoptado medidas orientadas a establecer, mantener y fortalecer mecanismos de consulta, como se indica en la sección 3.5 del literal “A” del capítulo II de este informe.**

[118] En vista de los comentarios que se expresaron en esa sección, el Comité sugiere que Saint Kitts y Nevis considere las siguientes recomendaciones:

31. Véase respuesta de Saint Kitts y Nevis al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 15 y 16, *supra* nota 4.

- a) Desarrollar, tomando en cuenta sus sistemas jurídicos internos, normas y procedimientos que establezcan, mantengan y fortalezcan mecanismos para estimular a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública como parte de los esfuerzos para prevenir las prácticas corruptas promoviendo nuevas formas de control social, por ejemplo comités comunitarios de supervisión para dar seguimiento a las actividades u obras públicas. (Véase sección 3.5.2 del literal “A” del capítulo II de este informe).
- b) Diseñar e implementar programas específicos tendientes a dar publicidad a los mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil en el seguimiento de la gestión pública. (Véase sección 3.5.2 del literal “A” del capítulo II de este informe).

4. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)

4.1. ASISTENCIA MUTUA

4.1.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[119] – Saint Kitts y Nevis tiene un conjunto de disposiciones y medidas relacionadas con estos mecanismos, entre las que destaca el capítulo 4:19 de la Ley de Asistencia Mutua en Materia Penal^{32/}. Esta Ley establece “... *disposiciones con respecto al mecanismo relativo a la asistencia mutua en materia penal dentro del Commonwealth y para facilitar su operación en Saint Kitts y Nevis; y disposiciones relativas a la asistencia mutua en materia penal entre Saint Kitts y Nevis y otros países fuera del Commonwealth*”.

[120] El tipo de asistencia que puede ser prestada según esta Ley incluye asistencia para obtener evidencias, identificar y localizar testigos, entregar documentos, transferir prisioneros y asistencia relativa a órdenes de interdicto, decomiso y confiscación.

[121] La Parte IV de esta Ley incluye disposiciones para extender la asistencia a países fuera de la *Commonwealth*. Las secciones 28 y 29 establecen lo siguiente: “29. *Definición para los fines de la parte IV. En esta parte, “país” es un país que no está incluido en la definición de “país Commonwealth” en la sección 2(1); “Tratado” incluye un convenio, protocolo, acuerdo o arreglo.* 30. *Implementación de un tratado. (1) Los reglamentos pueden contener disposiciones para dar efecto a un tratado, establecido en los reglamentos, para asistencia mutua bilateral en materia penal entre Saint Kitts y Nevis y un país especificado en los reglamentos; (2) Para tal propósito, los reglamentos pueden, particularmente, (a) indicar que esta Ley se aplicará en relación con el país así especificado como si fuera un país de Commonwealth, sujetándose a las limitaciones, condiciones, excepciones o requisitos (en su caso) que pudieran prescribirse; o (b) ampliar, como se dispone en la sección 35(2), la aplicación de cualquier otra ley en relación con el país así especificado; y esta Ley o, según sea el caso, la otra ley, se aplicará de la manera correspondiente.”*

[122] En su respuesta al cuestionario^{33/}, Saint Kitts y Nevis también señala que “*cuando surge el tema del lavado de activos en relación con actos de corrupción, la sección 59 de la Ley sobre Productos del Delito, capítulo 4:28^{34/} establece que la Unidad de Inteligencia Financiera y el Fiscal General, dentro de los límites del sistema jurídico del Estado, cooperarán con las autoridades*

32. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_kna_mla_act_2002.pdf

33. Véase respuesta de Saint Kitts y Nevis al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 17, *supra* nota 4.

34. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_kna_proceeds_of_crime_act_cap_%204_28.pdf

competentes de otro Estado en asuntos relacionados con delitos de lavado de activos. Tal cooperación incluye la obtención de testimonios, la entrega de documentos, la ejecución de cateos e incautación y el suministro de información y evidencias.”

[123] – Saint Kitts y Nevis también dispone de un tratado de asistencia jurídica mutua^{35/} con Estados Unidos, que prevé la asistencia mutua en relación con la investigación, juicio y prevención en casos delitos penales y en procesos en materia penal.

[124] – Cabe señalar que el Estado analizado suscribió también, en abril de 2008, un Memorando de Entendimiento^{36/} con la Secretaría General de la OEA para Participar en la Red Hemisférica de Cooperación Jurídica en Materia Penal (Red en Materia Penal de la OEA/REMJA)^{37/}.

4.1.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[125] Las disposiciones citadas en la sección anterior pueden ayudar a lograr los propósitos de la Convención de promover y facilitar la asistencia mutua entre los Estados partes, y puede promover los fines específicos de la Convención relacionados con la investigación y el juzgamiento de prácticas corruptas, siempre y cuando se empleen para tal propósito.

[126] En su respuesta al cuestionario y con ocasión de la visita *in situ*, el Estado analizado puso de presente que únicamente ha recibido una solicitud de asistencia mutua con fundamento en la Convención, la cual está en trámite desde agosto de 2013. Por ello^{38/}, el Comité desea resaltar la importancia de que las previsiones con las que cuenta Saint Kitts y Nevis en materia de asistencia recíproca, al igual que la propia Convención, se apliquen a casos concretos de actos de corrupción, lo cual presupone un conocimiento adecuado de sus disposiciones por parte de quienes tienen competencias para su aplicación. Lo anterior no sólo como Estado requerido, sino también y especialmente, como Estado requirente de asistencia mutua penal de otros Estados. Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité formulará una recomendación. (Véase recomendación de la sección 4.1.4 inciso a), del literal “A” del capítulo II de este informe).

[127] Asimismo, el Comité estima que Saint Kitts y Nevis debería considerar la ratificación de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal^{39/}, así como participar activamente en las Reuniones de Ministros de Justicia u Otros Ministros, Procuradores o Fiscales de las Américas (REMJA) y su Grupo de Trabajo en Cooperación Jurídica en Materia Penal. (Véase recomendación de la sección 4.1.4 inciso b), del literal “A” del capítulo II de este informe).

4.1.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

[128] El Estado analizado no suministra información sobre los resultados en este campo, por lo tanto, no es posible hacer una valoración integral al respecto. Consecuentemente, el Comité formulará las recomendaciones correspondientes. (Véase recomendaciones generales, incisos b) y c), del literal “A” del capítulo II de este informe).

35. Disponible en: https://www.oas.org/juridico/MLA/en/traites/en_traites-mla-usa-kna.pdf

36. Disponible en: <http://www.oas.org/dil/AgreementsPDF/155-2008.PDF>

37. Véase: <http://www.oas.org/juridico/MLA>

38. El 13 de marzo de 2015, Saint Kitts y Nevis declaró que “... se recibió una solicitud en 2014 que está todavía en proceso con respecto a la naturaleza del asunto. Puesto que nuestros asuntos no se registran con base en el fundamento jurídico de la solicitud, no podemos decir si se recibieron otras solicitudes según esta Ley.”

39. Disponible en: <http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-55.html>

[129] Asimismo, considera importante que Saint Kitts y Nevis diseñe e implemente un programa de información que permita a sus autoridades hacer un seguimiento permanente de las solicitudes de asistencia recíproca referidas a actos de corrupción y, en particular, a aquellos contemplados en la Convención. (Véase recomendación de la sección 4.1.4 inciso c), del literal “A” del capítulo II de este informe).

4.1.4. Conclusiones y recomendaciones

[130] **Saint Kitts y Nevis ha considerado y adoptado ciertas medidas relacionadas con la asistencia mutua, de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo XIV de la Convención, como se describe y analiza en la sección 4.1 del literal “A” del capítulo II de este informe.**

[131] En vista de los comentarios que se expresaron en esa sección, el Comité sugiere que Saint Kitts y Nevis considere las siguientes recomendaciones:

- a) Diseñar e implementar un programa integral de capacitación y difusión para las autoridades, de tal manera que conozcan y apliquen las disposiciones contenidas en la Convención y en otros tratados en que Saint Kitts y Nevis sea Estado Parte en materia de asistencia mutua en la investigación o procesamiento de prácticas corruptas. (Véase la sección 4.1.2 del literal “A” del capítulo II de este informe).
- b) Considerar la posibilidad de ratificar la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal y participar activamente en las Reuniones de Ministros de Justicia u Otros Ministros, Procuradores o Fiscales de las Américas (REMJA) y su Grupo de Trabajo en Cooperación Jurídica en Materia Penal. (Véase la sección 4.1.2 del literal “A” del capítulo II de este informe).
- c) Diseñar e implementar un programa de información que les permita a las autoridades de Saint Kitts y Nevis dar un seguimiento constante a las solicitudes de asistencia mutua relativas a prácticas corruptas, en especial las contempladas en la Convención. (Véase la sección 4.1.2 del literal “A” del capítulo II de este informe).

4.2. COOPERACIÓN TÉCNICA MUTUA

4.2.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[132] En su respuesta al cuestionario^{40/}, Saint Kitts y Nevis observa que “...normalmente celebra arreglos de cooperación técnica de manera bilateral. La Federación tiene la intención de utilizar este medio para la cooperación técnica mutua en la lucha contra la corrupción.”

4.2.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[133] El Comité, con base en la información que tuvo a su disposición, así como de lo expresado en la respuesta del Estado analizado al cuestionario^{41/} en el sentido de que el Gobierno no ha formulado ni recibió de otros Estados Parte solicitudes relativas a la cooperación técnica mutua a que se refiere la Convención, formulará una recomendación a Saint Kitts y Nevis tendiente a considerar determinar

40. Véase respuesta de Saint Kitts y Nevis al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 18, *supra* nota 4.

41. Véase respuesta de Saint Kitts y Nevis al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 18, *supra* nota 4.

y priorizar áreas específicas en las que crea que necesita la cooperación técnica de otros Estados Parte para fortalecer sus capacidades de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción y alienta a los demás Estados Parte a que redoblen esfuerzos para intercambiar cooperación técnica con Saint Kitts y Nevis sobre las formas y medios más efectivos para cumplir con los propósitos de la Convención. (Véase recomendación de la sección 4.2.4 inciso a), del literal “A” del capítulo II de este informe).

[134] De igual manera y con la misma finalidad de fortalecer las capacidades del Estado analizado de prevenir, detectar, investigar y sancionar la corrupción, el Comité estima conveniente que Saint Kitts y Nevis considere desarrollar, con el apoyo de agencias de cooperación u organismos internacionales, programas y/o proyectos de cooperación técnica sobre los aspectos a los que se refiere la Convención y, en este sentido, formulará una recomendación. (Véase recomendación de la sección 4.2.4 inciso b), del literal “A” del capítulo II de este informe).

4.2.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

[135] Teniendo en cuenta lo expresando en las dos secciones anteriores, el Estado analizado no suministra información sobre los resultados en este campo, por lo tanto, no es posible hacer una valoración integral al respecto. Consecuentemente, el Comité formulará las recomendaciones correspondientes. (Véase recomendaciones generales, incisos b) y c), del literal “A” del capítulo II de este informe).

4.2.4. Conclusiones y recomendaciones

[136] **Saint Kitts y Nevis ha considerado ciertas medidas relacionadas con la cooperación técnica mutua de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo XIV de la Convención, como se describe y analiza en la sección 4.2 del literal “A” del capítulo II de este informe.**

[137] En vista de los comentarios que se expresaron en esa sección, el Comité sugiere que Saint Kitts y Nevis considere las siguientes recomendaciones:

- a) Determinar y priorizar las áreas específicas en las cuales Saint Kitts y Nevis considere que requiere cooperación técnica de otros Estados Parte para fortalecer sus capacidades de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción. (Véase sección 4.2.2 del literal “A” del capítulo II de este informe).
- b) Desarrollar, con el apoyo de agencias de cooperación u organismos internacionales, programas y/o proyectos de cooperación técnica sobre los aspectos a los que se refiere la Convención. (Véase sección 4.2.2 del literal “A” del capítulo II de este informe).

5. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)

5.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[138] En su respuesta al cuestionario^{42/}, Saint Kitts y Nevis señala que no ha designado a una Autoridad Central específicamente con el propósito de canalizar las solicitudes de asistencia mutua como se establece en la Convención. Sin embargo, puede procesar las solicitudes de asistencia jurídica mutua en virtud de la Ley de Asistencia Mutua en Materia Penal a través del Procurador General, quien es la Autoridad Competente según esta Ley.

[139] Asimismo, en la misma respuesta, el Estado analizado indica que no existe legislación específica que designe a una Autoridad Central para los fines de canalizar las solicitudes de cooperación técnica mutua como lo requiere la Convención. Tales solicitudes pueden canalizarse a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

5.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[140] No obstante que el Procurador General y el Ministerio de Relaciones Exteriores, mencionados por el Estado analizado en su respuesta, pueden servir para el cumplimiento de los propósitos de la Convención en materia de asistencia recíproca y cooperación técnica mutua, respectivamente, el Comité formulará una recomendación con el objeto de que se haga una designación expresa de la autoridad o autoridades centrales para tales propósitos, y se comunique formalmente tal designación a la Secretaría General de la OEA, lo cual facilitaría la comunicación y coordinación con las autoridades centrales de otros Estados Parte, para dichos propósitos. (Véase recomendaciones de la sección 5.4, incisos a) y b), del literal “A” del capítulo II de este informe).

5.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

[141] Teniendo en cuenta lo expresando en las dos secciones anteriores, el Estado analizado no suministra información sobre los resultados en este campo, por lo tanto, no es posible hacer una valoración integral al respecto. Consecuentemente, el Comité formulará las recomendaciones correspondientes. (Véase recomendaciones generales, incisos b) y c), del literal “A” del capítulo II de este informe).

5.4. Conclusiones y recomendaciones

[142] **Saint Kitts y Nevis ha considerado y adoptado ciertas medidas relacionadas con la designación de las Autoridades Centrales a que se hace referencia en el artículo XVIII de la Convención, según se describió y analizo en la sección 5 del literal “A” del capítulo II de este informe.**

[143] En vista de los comentarios que se expresaron en esa sección, el Comité sugiere que Saint Kitts y Nevis considere las siguientes recomendaciones:

42. Véase respuesta de Saint Kitts y Nevis al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 18, *supra* nota 4.

- a) Designar, mediante los procedimientos establecidos al respecto, a la autoridad o autoridades centrales para los propósitos de la asistencia y la cooperación internacionales previstas en la Convención. (Véase sección 5.2 del literal “A” del capítulo II de este informe).
- b) Informar a la Secretaría General de la OEA^{43/} la designación de la autoridad o autoridades aludidas en el punto anterior, de acuerdo con las formalidades previstas para ello. (Véase sección 5.2 del literal “A” del capítulo II de este informe).

6. RECOMENDACIONES GENERALES

[144] Con base en el análisis y los aportes realizados a lo largo del literal “A” del capítulo II de este informe, el Comité sugiere que Saint Kitts y Nevis considere las siguientes recomendaciones generales:

- a) Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el literal “A” del capítulo II de este informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación.
- b) Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el literal “A” del capítulo II de este informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, podrá tomar en cuenta el listado de indicadores más generalizados, aplicables en el sistema interamericano que estuvieran disponibles para la selección indicada por parte del Estado analizado, que ha sido publicado por la Secretaría Técnica del Comité, en página en Internet de la OEA, así como información que se derive del análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la recomendación 6 “c” siguiente.
- c) Desarrollar, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, procedimientos para analizar los mecanismos mencionados en el literal “A” del capítulo II de este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo.

7. SEGUIMIENTO

[145] El Comité considerará los informes periódicos de Saint Kitts y Nevis sobre los avances en la implementación de las anteriores recomendaciones, en el marco de las reuniones plenarias del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento.

[146] Asimismo, el Comité analizará los avances en la implementación de las recomendaciones formuladas en el presente informe, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 31 y, siempre y cuando corresponda, 32 del Reglamento.

43. El Formulario para la designación de Autoridades Centrales de las Convenciones Interamericanas se encuentra disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/OAS_form_designacion_autoridad_central.doc

B) ANÁLISIS DE LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA LA CUARTA RONDA

ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR MECANISMOS MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA CONVENCIÓN)

[147] Saint Kitts y Nevis cuenta con un conjunto de órganos de control superior^{44/} con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas, entre los que cabe destacar los siguientes: la Real Fuerza de Policía de Saint Kitts y Nevis; el Procurador General; el Fiscal General; el Director de Auditoría; el Departamento de la Corte de Magistrados; el *Ombudsman*; el Contralor General; y el Ministerio de Finanzas.

[148] A continuación se hace una breve descripción de los propósitos y funciones de los cuatro órganos seleccionados por Saint Kitts y Nevis que serán analizados en el literal “B” del capítulo II de este informe.

[149] – La Oficina del Fiscal General (en adelante “DPP” por sus siglas en inglés) es un cargo público que está dispuesto constitucionalmente por los artículos 65 y 81 de la Constitución. El objetivo del DPP es presentar ante los tribunales los casos penales de manera oportuna; suministrar a los ciudadanos un servicio de fiscalía tanto para las víctimas como para los acusados; y colaborar con los funcionarios de las fuerzas policiales para facilitar la recopilación, procesamiento y presentación de evidencias ante los tribunales.

[150] – El Departamento de la Corte de Magistrados es el ente administrativo de la Corte de Magistrados. La jurisdicción de la Corte es limitada por estatutos y tiene la responsabilidad de resolver la mayoría de los casos relativos a asuntos criminales, civiles, de juventud y de familia.

[151] – El *Ombudsman* es un puesto público establecido por ley la Ley del Ombudsman de 2009 para los fines de proteger y hacer cumplir los derechos de los ciudadanos de Saint Kitts y Nevis y contribuir al desarrollo de una cultura de la función pública caracterizada por la justicia, la dedicación, el compromiso, la apertura, la rendición de cuentas y la promoción del derecho a una buena gestión pública.

[152] – La Real Fuerza Policial de Saint Kitts y Nevis (en adelante “RPF” por sus siglas en inglés) es la única corporación policial del Estado y sus funciones incluyen, entre otras, la prevención, detección e investigación de la delincuencia; y el mantenimiento de la ley y el orden.

44. La Metodología aprobada por la Cuarta Ronda (documento SG/MESICIC/doc.289/11 rev.2) señala lo siguiente en su sección IV con respecto al artículo III, párrafo 9 de la Convención, relativo a los órganos de control superior: “En relación con la disposición anterior, se analizará si las medidas consideradas por los Estados Parte al respecto están “destinadas a crear, mantener y fortalecer” órganos de control superior con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas, tal como lo prevé el artículo III, párrafo 9 de la Convención. Para lo anterior, en primer lugar, se tomará nota de los órganos de control superior del respectivo país, pertinentes para los propósitos de la citada disposición de la Convención de prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas. En segundo lugar, teniendo en cuenta que en los Estados que integran el MESICIC existen numerosos órganos de control superior que tienen asignados los propósitos antes aludidos, cada país seleccionará 4 ó 5 de dichos órganos, teniendo en cuenta su importancia institucional y que las funciones asignadas a los mismos cubran uno o varios de los propósitos de prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas que generen responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; y penal.”

1. LA OFICINA DEL FISCAL GENERAL

1.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[153] El DPP cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[154] El DPP es un cargo autónomo, independiente y público establecido por las secciones 65 y 81 de la Constitución para representar eficazmente a la Corona en todos los procesos penales, ya sea por litigio o de alguna otra manera.

[155] Con respecto a sus objetivos y funciones, la sección 65(2) de la Constitución establece que el DPP estará facultado, en cualquier caso en que lo considere deseable, para instituir y llevar cualquier proceso penal contra cualquier persona ante cualquier corte, salvo los tribunales militares, con respecto a cualquier delito que supuestamente hubiere cometido dicha persona; para atraer y continuar cualquier proceso penal de este tipo que haya instituido o esté llevando cualquier otra persona o autoridad; y suspender en cualquier etapa anterior al fallo cualquier proceso penal de este tipo instituido o llevado por él mismo o por cualquier otra persona o autoridad.

[156] De acuerdo con la sección 65(4) constitucional, la facultad de atraer y continuar o suspender cualquier proceso penal instituido por cualquier otra persona o autoridad recae en el DPP y excluye a cualquier otra persona o autoridad. La sección 64(5) establece además que los procesos penales incluyen cualquier apelación de cualquier determinación de cualquier corte en un proceso penal, mientras que la sección 64.3 dispone que la función del DPP puede ser ejercida por él mismo personalmente o a través de otras personas que actúen bajo sus instrucciones generales o específicas y de acuerdo con ellas.

[157] En relación con su independencia, la sección 65(6) de la Constitución dispone que en el ejercicio de las funciones que le confieren las secciones 65(2) y 26(6) constitucionales, el DPP no debe verse sujeto a la dirección ni al control de ninguna otra persona o autoridad.

[158] Sobre la manera en que se adoptan las decisiones del DPP, como anexo a su respuesta al cuestionario, el Estado analizado suministró una copia del Código para Fiscales de Saint Kitts y Nevis^{45/}, cuyo capítulo 6 establece el proceso decisorio, principalmente en relación con el inicio de los procesos penales.

[159] En relación con la manera en que es seleccionado el DPP, la sección 81(1) de la Constitución dispone que su nombramiento recae en el Gobernador General, con la recomendación de la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos. La sección 81(3) de la Constitución establece que para ser designada para ocupar el cargo de DPP la persona deberá contar con una de las calificaciones especificadas y haberla tenido durante un período no menor de cinco años. Sujetándose a las disposiciones de las secciones 81(5) y 81(10), el DPP deberá dejar su puesto al cumplir cincuenta y cinco años, que pueden ser ampliados hasta los sesenta años por el Gobernador General. Las secciones 81(6) y 81(7) disponen además que el DPP puede ser destituido de su cargo solamente por incapacidad de desempeñar las funciones de su puesto (ya sea por enfermedad física o mental o por cualquier otra causa de cualquier índole) o por conducta indebida. Los detalles de los procedimientos de destitución se establecen en las secciones 81(8) y 81(9) de la Constitución.

45. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_kna_code_pros.pdf

[160] En relación con la manera en que se identifican los recursos humanos necesarios para las operaciones del DPP, este tiene dos categorías de personal: (a) abogados de la Corona (fiscales) y (b) personal administrativo. Sobre los funcionarios jurídicos, según la sección 83 de la Constitución, su proceso de nombramiento, el ejercicio del control disciplinario y su remoción recaen en el Gobernador General, actuando de conformidad con la asesoría la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos de acuerdo con las disposiciones aplicables del Reglamento de la Comisión de Servicios Judiciales y Legales.

[161] En lo relativo al personal administrativo del DPP, según la sección 78 de la Constitución, la Comisión del Servicio Público es responsable de sus nombramientos, promociones, transferencias, confirmación de nombramientos, así como de su remoción y el ejercicio del control disciplinario sobre ellos de conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley del Servicio Público de 2011 y el Reglamento promulgado con base en dicha Ley.

[162] En materia de capacitación, con ocasión de la visita *in situ*, la representación del DPP puso de presente que, con el apoyo del Gobierno del Reino Unido, en mayo de 2014, junto con la Unidad Anticrimen y la Oficina del Primer Ministro de Saint Kitts y Nevis, se lanzó un programa de capacitación para fiscales y agentes del orden público denominado “Programa de Capacitación en Persecución Práctica y Orden Público Proactivo” (*Practical Prosecuting and Proactive Law Enforcement Training Programme*) el cual se estará implementando a partir de enero de 2015. Asimismo, en esa oportunidad, la representación del DPP señaló también que desafortunadamente la capacitación con que cuenta su personal actualmente no es consistente y varía entre múltiples temas, razón por la cual el DPP está diseñando un programa de capacitación integral sobre gestión de casos que involucre tanto a los fiscales como a los fiscales policiales, sin perjuicio del mecanismo de *mesas redondas* que periódicamente se vienen realizando al interior del DPP para ofrecer cierto tipo de capacitación a sus funcionarios.

[163] Sobre este mismo aspecto, la representación del DPP también comentó que en razón de la insuficiencia de recursos destinados a este rubro en su presupuesto, no cuenta con la posibilidad de financiar a sus funcionarios a que participen en talleres u otros eventos de capacitación que ofrecen en el extranjero otros Estados y/u organismos internacionales.

[164] En lo que tiene que ver con la existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o de manuales o guías relativas a las mismas, el Estado analizado suministró junto con su respuesta la Ley de Procedimiento Penal^{46/}, que en sus secciones 12 a 18 desarrolla las facultades del DPP en la fase de investigación preliminar a juicio. Asimismo, Saint Kitts y Nevis cuenta con un Manual de Conducta para Fiscales que rige el actuar de los mismos.

[165] Con relación a la implementación de sistemas o de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores, la representación del DPP, con ocasión de la visita *in situ*, si bien señaló que cuenta con equipos de cómputo modernos, carece de cualquier tipo de sistemas y tecnologías acordes a las funciones que desarrolla.

[166] En cuanto a la manera en la que se le suministra a los ciudadanos información acerca de sus objetivos y funciones; se les dan a conocer los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar gestiones ante los mismos, el Estado analizado señala en su respuesta que “la mayor parte de la información con respecto al cargo del DPP proviene de los medios de comunicación. Muchas veces, las personas de los medios de comunicación

46. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_kna_crim_proc_act.pdf

asisten al tribunal e informan al público en general lo que ha acontecido publicando el contenido de los juicios en sus respectivos sitios web, que son accesibles al público en general. Los medios de comunicación también pueden asistir a funciones especiales e informar lo ocurrido al público en general, por ejemplo, el inicio del período legislativo o las sesiones de capacitación en el Despacho del DPP.^{47/} Asimismo, con ocasión de la visita *in situ*, la representación del DPP puso de presente que debido a la falta de presupuesto no ha sido posible desarrollar mecanismos de promoción sobre su trabajo y los resultados alcanzados en el desempeño de sus funciones.

[167] En relación con los mecanismos de control interno, el DPP es un órgano autónomo con sus propios mecanismos de contabilidad mas no cuenta con unidad de auditoría interna. Asimismo, en cuanto a eventuales reclamos, quejas o denuncias que pudieran presentarse relacionadas con el desempeño del personal legal a su servicio, la representación del DPP se refirió, a los procedimientos disciplinarios previstos ante la Comisión del Servicio Público y la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos, puntualizando, además, que toda queja o reclamo en contra de cualquier funcionario al servicio del DPP deberá remitirse, en primera instancia, al Fiscal General.

[168] Respecto a la manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su funcionamiento, las consultas para el presupuesto se llevan a cabo en septiembre. El Comité de Planeación del Presupuesto le permite al DPP entregar cada año un cálculo estimado de los recursos totales que requerirá su despacho. Esta información se incluye entonces en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Asuntos Jurídicos. El presupuesto es aprobado posteriormente por el Gabinete y se debate en la Asamblea, de conformidad con los términos del capítulo VI constitucional y las leyes presupuestarias anuales del ejercicio fiscal que corresponda.

[169] Con respecto a los mecanismos de coordinación, el DPP tiene el apoyo de diversos organismos para asegurar que sus funciones se lleven a cabo eficazmente. Los dos principales organismos son el Ministerio de Justicia y Asuntos Jurídicos y la RPF. El Ministerio de Justicia y Asuntos Jurídicos colabora con el DPP en materia administrativa asegurándose, por ejemplo, de que el DPP disponga de personal suficiente, en particular abogados de la Corona, así como fondos suficientes para asegurar que opere de manera eficiente. La RPF también apoya al DPP para asegurar que los delitos se investiguen correctamente antes de que se inicien los procesos penales. Asimismo, con ocasión de la visita *in situ*, la representación del DPP puso de presente la suscripción de un memorando de entendimiento entre esta dependencia y la RPF como parte del Servicio Nacional de Persecución Penal, el cual, entre otros aspectos, establece las pautas en cuanto a la asesoría jurídica y supervisión de los fiscales policiales por parte del DPP para la adecuada persecución de los delitos.

[170] El DPP desarrolla consultas de interés general con la sociedad civil. Además, se relaciona, entre otras instituciones públicas, con las Fuerzas de Defensa, Aduanas, el Ministerio de Finanzas y otros organismos financieros como el Banco Central del Caribe Oriental para ejercer sus funciones.

[171] Finalmente, en cuanto a los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones, en el marco de la visita *in situ*, la representación del DPP señaló que no cuenta con los mismos, argumentando, como mecanismo más cercano, los informes mensuales de gestión que el Fiscal General presenta la Ministro de Justicia y de Asuntos Legales, así como los informes administrativos que se presentan al Secretario Permanente del Ministerio de Justicia y Asuntos Jurídicos.

47. Véase respuesta de Saint Kitts y Nevis al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 24, *supra* nota 4.

1.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[172] El DPP cuenta con un conjunto de disposiciones y/o de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 1.1 del presente informe. No obstante, el Comité estima que sería apropiado formular ciertos comentarios en relación con las mismas:

[173] En primer lugar, con relación a la manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, el Comité observa que de conformidad con lo dispuesto en la sección 81(1) de la Constitución, el nombramiento del Fiscal General recae en la figura del Gobernador General previa recomendación de la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos, y podrá sólo ser removido de su cargo con sujeción a lo dispuesto en las secciones 81(6) y 81(7), siguiéndose el procedimiento descrito en las secciones 81(8) y 81(9) constitucionales. Sin embargo, con ocasión de la visita *in situ*, el Fiscal General señaló que el cargo que actualmente sustenta se deriva de un *contrato de tiempo completo* que suscribió por dos años con el Ministerio de Justicia y Asuntos Jurídicos del Estado analizado previa convocatoria pública.

[174] Para el Comité, el hecho que el cargo del Fiscal General esté sujeto a un *contrato* por tiempo determinado, aunque éste se derive de una convocatoria pública y pudiera ser renovado, no ofrece, entre otros aspectos, seguridad de permanencia laboral para la persona que ocupe dicha posición ni un debido proceso en los procedimientos constitucionales que sobre responsabilidad por sus actuaciones y permanencia en el cargo se sigan en relación con el Fiscal General. El Comité considera que esta situación podría ir en detrimento de la imparcialidad, objetividad y continuidad de la institución en el desempeño de las atribuciones y responsabilidades que por mandato constitucional y legal le competen, por lo que formulará una recomendación tendiente a que se dé cumplimiento a las disposiciones constitucionales que rigen el nombramiento del Fiscal General.^{48/} (Véase recomendación 1.4.1. de la sección 1.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

[175] En segundo lugar, en lo que respecta a la manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su funcionamiento y en la que son provistos los mismos, con ocasión de la visita *in situ* y sin perjuicio del régimen descrito en la sección anterior, la representación del DPP aludió a ciertos procedimientos y prácticas *informales* que se siguen al interior de la institución para ocupar las vacantes a que se llegaran a presentar y en los que el Fiscal General tiene la decisión final en cuanto a su contratación.

[176] Sin perjuicio de lo anterior, en donde se denota la necesidad de que el Estado analizado considere de fortalecer, con base en el mérito y en los principios de equidad, publicidad y eficiencia consagrados en la Convención, los sistemas y procesos de selección de funcionarios públicos, en este caso, al servicio del DPP, el Comité se reserva el derecho de formular recomendaciones en esta oportunidad, teniendo en cuenta que el análisis de los sistemas para la contratación de funcionarios públicos a que se refiere el párrafo 5° del artículo III de la Convención, que fueron materia de la Segunda Ronda, serán analizados en su integridad con relación a Saint Kitts y Nevis en la Quinta

48. El 13 de marzo de 2015, en términos de la seguridad de permanencia en el cargo del DPP y los magistrados, el Estado analizado informó que los contratos normalmente establecen que el funcionario está sujeto a los reglamentos y procedimientos del servicio público. La jurisprudencia ha establecido que a pesar de la existencia de contratos de empleo, el funcionario tiene derecho a las protecciones que ofrece la Constitución, en particular en lo que refiere a acciones disciplinarias y despido. *Inniss vs. Procurador General* [2009] 2 LRC 546, *Fraser vs Comisión de Servicios Judiciales y Legales* [2008] UKPC 25, [2009] 2 LRC 26.

Ronda, toda vez que durante el desarrollo de la Segunda Ronda el Estado analizado no se encontraba vinculado al Mecanismo.

[177] En tercer lugar, si bien el Estado analizado suministró junto con su respuesta la Ley de Procedimiento Penal y aludió a la existencia de un Manual de Conducta para Fiscales, el Comité, con base en la información que tuvo a su disposición, considera que los mismos no constituyen en sí manuales o instructivos que describan las funciones de los fiscales al servicio del DPP acerca de la manera de cómo abordar los procesos penales que deriven de la comisión de delitos, incluidas las prácticas corruptas, el Comité formulará una recomendación. (Véase recomendación 1.4.2. de la sección 1.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

[178] Guarda relación con lo anterior el hecho que, con ocasión de la visita *in situ*, la representación del DPP también puso de manifiesto la necesidad de contar con recursos para que tanto sus fiscales como los fiscales policiales –quienes no son abogados–, cuenten con capacitación periódica y adecuada para la correcta y efectiva persecución de los delitos, incluidos aquellos relacionados con actos de corrupción y, en este sentido, el Comité formulará una recomendación. (Véase recomendación 1.4.3. de la sección 1.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

[179] En cuarto lugar, el Comité tomó nota de lo manifestado por la representación del DPP con ocasión de la visita *in situ*, en el sentido de que dicha dependencia, salvo los equipos de cómputo con que cuenta, carece de sistemas y tecnologías modernos que faciliten el desarrollo de sus tareas, razón por la cual es conveniente que el Estado analizado considere redoblar esfuerzos para dotar a este órgano de control con herramientas tecnológicas que le permitan cumplir con mayor celeridad, eficiencia y eficacia sus obligaciones constitucionales y legales, principalmente aquellas relacionadas con la persecución de las prácticas corruptas que generan responsabilidad penal, por lo que formulará una recomendación al respecto. (Véase recomendación 1.4.4. de la sección 1.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

[180] Sumado a lo anterior y con base en la información recabada durante la visita *in situ*, el Comité toma nota también de la necesidad de recursos puesta de presente por la representación del DPP para promover entre la ciudadanía información acerca de sus objetivos, funciones y logros. Asimismo y reconociendo las bondades que ofrece en la actualidad el Internet para mantener al público informado acerca del quehacer de las instituciones gubernamentales y facilitar la consulta y accesibilidad de información de interés público, el Comité formulará una recomendación al Estado analizado tendiente a considerar adoptar las medidas que estimen necesarias a modo de establecer y mantener actualizado un sitio *web*, el cual, pudiera contener, entre otros aspectos, información acerca de los objetivos y funciones del DPP, marco jurídico y procedimientos para el cumplimiento de sus responsabilidades. (Véase recomendación 1.4.5. de la sección 1.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

[181] En quinto lugar, con relación a los recursos necesarios para su funcionamiento, durante la visita *in situ* la representación del DPP manifestó tener una asignación presupuestaria adecuada para el cumplimiento de sus funciones, salvo en los rubros de capacitación, promoción y tecnología a los que ya se ha hecho referencia anteriormente. Sin embargo, la misma representación puso de presente la necesidad de contar con dos abogados de la Corona más para evitar eventuales retrasos en el cumplimiento de sus funciones. (Véase recomendación 1.4.6. de la sección 1.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

[182] En sexto lugar, si bien la representación del DPP señaló que ha suscrito un memorando de entendimiento con la RPF que, entre otros aspectos, establece las pautas en cuanto a la asesoría jurídica y supervisión de los fiscales policiales por parte del DPP para la adecuada persecución de los delitos, con ocasión de la visita *in situ*, la misma representación señaló la necesidad de una mejor y mayor coordinación entre ambas dependencias principalmente en temas relacionados con aspectos forenses, cadenas de custodia, integración de las averiguaciones y el mantenimiento de evidencias. Asimismo, en relación con otras dependencias del Estado, representación del DPP se refirió a la falta de coordinación y apoyo de parte de éstas para el adecuado cumplimiento de las funciones del DPP, razón por la cual el Comité formulará una recomendación tendiente a fortalecer este tipo de relaciones a través de mecanismos efectivos de coordinación entre los actores involucrados en la persecución e investigación de prácticas corruptas que generen responsabilidad penal, incluyendo al DPP, la RPF, la Oficina del Director de Autoría y la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otras, a fin de establecer procedimientos y/o lineamientos efectivos y oportunos de intercambio de información y asesoría jurídica para la instauración adecuada ante los tribunales de los procesos penales, principalmente aquellos relacionados con actos de corrupción. (Véase recomendación 1.4.7. de la sección 1.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

[183] Finalmente, en cuanto a los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones, el Comité toma nota de la información recaba con ocasión de la visita *in situ*. Sin embargo, con base en la misma, el Comité estima conveniente que el Estado analizado considere adoptar las medidas que se estimen pertinentes a modo de establecer, en el marco del DPP, mecanismos de rendición de cuentas o la presentación de informes de gestión sobre el cumplimiento de sus funciones y la manera de hacer éstos públicos. (Véase recomendación 1.4.8. de la sección 1.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

1.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[184] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado no proporciona información sobre resultados del DPP en cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades principalmente aquellas relacionadas con la persecución de prácticas corruptas que generan responsabilidad penal. Lo anterior responde a que, con ocasión de la visita *in situ*, la representación de este órgano de control puso de presente que carece de información estadística sobre el desempeño de sus funciones y atribuciones y que, tratándose de prácticas corruptas, únicamente tiene conocimiento de un caso, el cual se encuentra en trámite. Con base en lo anterior, el Comité no puede hacer una valoración integral sobre los resultados en este campo y, en este sentido, formulará las recomendaciones correspondientes. (Véase recomendaciones 1.4.9 a 1.4.12 de la sección 1.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

1.4. Conclusiones y recomendaciones

[185] Con base en el análisis integral realizado con respecto al DPP en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[186] **Saint Kitts y Nevis ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer al DPP, como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 1 del literal “B” del capítulo II de este informe.**

[187] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere la siguientes recomendaciones:

- 1.4.1. Nombrar al Fiscal General para el desempeño de sus funciones públicas de conformidad con lo dispuesto en la sección 81 constitucional y no por contrato. (Véase sección 1.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 1.4.2. Desarrollar manuales y/o guías que orienten a los fiscales a instituir y desarrollar de manera adecuada y efectiva los procesos penales relacionados con prácticas corruptas. (Véase sección 1.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 1.4.3. Dotar al DPP con los recursos financieros necesarios que aseguren la capacitación continua de los fiscales para el fortalecimiento de sus conocimientos y habilidades respecto de la correcta y efectiva persecución de los delitos, principalmente los relacionados con actos de corrupción, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos. (Véase sección 1.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 1.4.4. Obtener herramientas tecnológicas que le faciliten al DPP cumplir con mayor eficiencia y eficacia sus obligaciones constitucionales y legales, principalmente aquellas relacionadas con la persecución de prácticas corruptas que generen responsabilidad penal. (Véase sección 1.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 1.4.5. Desarrollar y mantener actualizado un sitio *web* el cual, pudiera contener información acerca de los objetivos y funciones del DPP, su marco jurídico y procedimientos. (Véase sección 1.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 1.4.6. Dotar al DPP con los recursos humanos profesionales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones, principalmente las relacionadas con la persecución de los delitos de corrupción, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos. (Véase sección 1.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 1.4.7. Implementar mecanismos de coordinación, cuando corresponda, entre el DPP, la RFP, la Oficina del Director de Auditoría y la Unidad de Inteligencia Financiera, tendientes a establecer procedimientos y/o lineamientos efectivos y oportunos de intercambio de información y asesoría jurídica para el adecuado enjuiciamiento de los procesos penales, principalmente los relacionados con actos de corrupción. (Véase sección 1.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 1.4.8. Establecer, en el marco de las competencias y facultades del DPP, mecanismos de rendición de cuentas o la presentación de informes de gestión sobre el cumplimiento de sus funciones y considerar mecanismos para hacerlos públicos. (Véase sección 1.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 1.4.9. Elaborar y publicar información estadística relativa a los enjuiciamientos relacionados con actos de corrupción tipificados en el Código Penal y los consagrados en la Convención que permita conocer cuántos casos se encuentran en curso; cuántos casos han sido desestimados; y en cuántos casos se ha adoptado una decisión, así como las sanciones impuestas como resultado de tales decisiones, en orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, una medida correctiva. (Véase sección 1.3. del literal “B” del capítulo II de este informe).

- 1.4.10. Elaborar y publicar información estadística relativa a las investigaciones adelantadas por quien tiene la competencia para hacerlo referidas al DPP en relación con los actos de corrupción tipificados en el Código Penal y los consagrados en la Convención que permita conocer cuántas investigaciones se encuentran en curso; cuántas investigaciones se han desestimado por cualquier razón; cuántas han prescrito por no haber sido concluidas en los términos establecidos; cuántas han sido desestimadas sin que se haya podido adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; cuántas se encuentran en condiciones de permitir que con base en ellas se pueda adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; y cuántas han hecho curso hacia la instancia competente para adoptar dicha decisión, en orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas. (Véase sección 1.3. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 1.4.11. Elaborar y publicar información estadística relativa a los procesos judiciales instaurados por actos de corrupción tipificados en el Código Penal y los consagrados en la Convención que permita conocer cuántos casos se encuentran en curso, han sido discontinuados, han prescrito, han sido discontinuados sin que se haya podido adoptar una decisión sobre los mismos, están listos para adoptar una decisión, o en los que se ha emitido una resolución y cuántos recibieron una decisión absolutoria o condenatoria, en orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas. (Véase sección 1.3. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 1.4.12. Desarrollar, en el ámbito del DPP, un mecanismo de seguimiento de los casos de corrupción que presente ante las cortes judiciales, que le permita conocer la tramitación que se le está dando a los mismos y sus resultados, y darle a éstos la divulgación necesaria para que los ciudadanos puedan apreciar sus esfuerzos en materia de persecución de actos de corrupción y contar con mayores elementos para evaluar su desempeño. (Véase sección 1.3. del literal “B” del capítulo II de este informe).

2. EL DEPARTAMENTO DE LA CORTE DE MAGISTRADOS

2.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[188] El Departamento de la Corte de Magistrados es el ente administrativo de la Corte de Magistrados que cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[189] La Corte de Magistrados constituye el tribunal judicial de primera instancia en el Estado analizado. Su jurisdicción se divide en tres distritos, dos en la isla de Saint Kitts (distritos A y B) y uno en la isla de Nevis (distrito C), cada uno de los cuales está encabezado por un Magistrado de Distrito.

[190] De conformidad con la sección 9 de la Ley sobre el Código de Procedimientos para Magistrados^{49/}, el Magistrado de Distrito tiene y posee todos los poderes y jurisdicción y debe llevar a cabo todos los deberes que actualmente se les confieren o imponen a los Magistrados de Distrito o

49. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_kna_mag_cod_proc_act.pdf

Jueces de Paz, ya sea por derecho consuetudinario o en virtud de cualquier reglamentación vigente actualmente o que en lo sucesivo se les confieran o impongan a dichos Magistrados de Distrito en virtud de cualquiera de esas reglamentaciones. Estas funciones, según la respuesta al cuestionario, incluyen a los magistrados que conocen de los casos penales menos graves, como robo menor, daño doloso, desorden público y delitos relacionados con vehículos motores. Conducen las averiguaciones preliminares y remiten a las personas acusadas de delitos graves —como violación y homicidio— a las Cortes Superiores, consideran las solicitudes de fianza y otorgan órdenes de cateo. Los magistrados también tienen jurisdicción sobre asuntos civiles y familiares.

[191] Específicamente, tratándose de los delitos de corrupción tipificados en el régimen jurídico del Estado analizado, con ocasión de la visita *in situ*, la representación del Departamento de la Corte de Magistrados señaló que los Magistrados constituyen la primera instancia judicial en Saint Kitts y Nevis cuando la RPF arresta a un presunto culpable por la comisión de alguno de estos delitos.

[192] En cuanto a su autonomía, los Magistrados están sujetos a las leyes de Saint Kitts y Nevis, principalmente la Ley sobre el Código de Procedimientos para Magistrados. Son independientes en el ejercicio de sus funciones y sus decisiones están sujetas a apelación ante la Corte de Apelaciones y a revisión por la Corte Superior. Asimismo, el alcance de las funciones de los Magistrados se determina por ley. El Magistrado solamente tiene jurisdicción cuando el derecho consuetudinario o la legislación específica le otorga jurisdicción sobre la materia del caso.

[193] En relación con la manera en que adoptan sus decisiones, cada Magistrado toma sus decisiones por su propio juicio de deliberación aplicando las leyes a los hechos que tiene ante sí. Para tomar una decisión, los Magistrados se guían por la legislación y las sentencias de los tribunales superiores registradas con autoridad vinculante o persuasiva. Los recursos que pueden presentarse contra las decisiones adoptadas por un magistrado pueden ser a través de una apelación ante la Corte de Apelaciones, una apelación ante el Consejo Privado y por revisión judicial, de conformidad con las disposiciones correspondientes de la Ley sobre el Código de Procedimientos para Magistrados y otras disposiciones. Según la sección 151 de la Ley sobre el Código de Procedimientos para Magistrados, un magistrado puede modificar su decisión en un caso civil dentro de un plazo de un mes tras emitir una resolución sobre el asunto.

[194] De acuerdo con la sección 83 constitucional y la sección 5 de la Ley sobre el Código de Procedimientos para Magistrados, los Magistrados son designados por el Gobernador General de acuerdo con la recomendación de la Comisión del Servicio Público, la cual, antes de hacer cualquier recomendación, deberá consultar con la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos. A este respecto, tanto de la respuesta del Estado analizado al cuestionario^{50/} como de la información recabada durante la visita *in situ*, se desprende que es el Ministerio de Justicia y Asuntos Jurídicos la entidad responsable de determinar los recursos humanos necesarios para el funcionamiento de la Corte de Magistrados, quienes son nombrados a través de un *contrato* por dos años, en donde el Ministro de Justicia y Asuntos Jurídicos, a través del Gobernador General, tiene la potestad de determinar si tales contratos pueden ser o no renovados por el mismo periodo.

[195] En cuanto a los requisitos para ser Magistrado, durante la visita *in situ*, la representación del Departamento de la Corte de Magistrados señaló que, sin estar reglamentada, existe una *política* que exige que los candidatos deben ser abogados practicantes con cinco años de experiencia y con licencia del Colegio de Abogados de Saint Kitts y Nevis para ejercer dicha profesión. Sobre el

50. Véase respuesta de Saint Kitts y Nevis al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 27, *supra* nota 4.

particular, se señaló igualmente que las vacantes a estos cargos se publican en el periódico local del Estado y su selección se realiza con base en el principio del mérito.

[196] Cabe señalar, además, que dentro de la estructura de la Corte de Magistrados, como su máxima autoridad, existe la figura del Magistrado de Distrito Principal, la cual es ejercida por el Magistrado de Distrito con mayor antigüedad dentro de la Corte, cuyas funciones incluyen aquellas de carácter administrativo y de supervisión de los funcionarios al servicio de la misma.

[197] Con base en la información suministrada por el Estado analizado en su respuesta al cuestionario y corroborada con ocasión de la visita *in situ*, la Corte de Magistrados ha iniciado un proyecto de colaboración con la Unidad para la Reforma del Sector Público para la elaboración y actualización de las descripciones de puestos del personal a su servicio, teniendo en cuenta que el trabajo de elaboración de dichas descripciones en el ámbito del Departamento de Recursos Humanos de la Comisión del Servicio Público ha demorado varios años.

[198] Asimismo, en materia de capacitación, ésta es impartida por lo menos una vez al año por el Instituto de Educación Judicial de la Corte Suprema del Caribe Oriental con sede en Santa Lucía, sin perjuicio de otras acciones de capacitación que de tiempo en tiempo ofrecen algunas agencias internacionales.

[199] En relación con la existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o de manuales o guías relativas a las mismas, el Estado analizado refiere en su respuesta a las disposiciones contenidas en la Ley sobre el Código de Procedimientos para Magistrados. Asimismo, durante la visita *in situ*, la representación del Departamento de la Corte de Magistrados hizo referencia también a las cláusulas contenidas en los contratos de trabajo de los Magistrados que integran la Corte.

[200] En lo que tiene ver con sistemas o tecnologías informáticas para facilitar el ejercicio de sus labores, la representación del Departamento de la Corte de Magistrados se refirió a la capacitación reciente que los Magistrados han recibido por parte de la Corte Suprema del Caribe Oriental para la utilización del Sistema de Gestión del Cumplimiento Judicial (JEMS, por sus siglas en inglés), el cual permite a los Magistrados crear electrónicamente sus propios calendarios de casos, tomar notas durante los procedimientos y registrar sentencias, además de que reduce problemas como el extravío o destrucción de documentos y ayuda a la programación eficiente de los casos.

[201] En lo que respecta a la manera en que se suministra información a los ciudadanos acerca de los objetivos y funciones de la Corte de Magistrados, el Estado analizado señala en su respuesta al cuestionario^{51/} que ésta puede obtenerse visitando personalmente la sede de la Corte en la capital del país. Asimismo, con ocasión de la visita *in situ* y sobre este punto en particular, la representación del Departamento de la Corte de Magistrados puso de presente la diseminación de cierto tipo de información correspondiente a ellos que se publica en el portal oficial en Internet de la Corte Suprema del Caribe Oriental^{52/}.

[202] Con base en la información recabada durante la visita *in situ*, en relación con los mecanismos de control interno, la Corte de Magistrados, en razón de su dimensión y falta de autonomía en el manejo de su presupuesto, no cuenta con ningún tipo de unidad o entidad de auditoría interna. No obstante, en cuanto a la atención de reclamos, quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento

51. Véase respuesta de Saint Kitts y Nevis al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 28, *supra* nota 4.

52. Véase: <http://www.eccourts.org>

de sus objetivos y con el desempeño del personal a su servicio, éstas se pueden presentar ante el Ministro de Justicia y Asuntos Jurídicos, el Presidente del Tribunal Supremo, o bien ante el Magistrado de Distrito Principal. Éste último, de acuerdo con la explicación dada por la representación del Departamento de la Corte de Magistrados en la misma visita, es quien dialoga con el funcionario implicado pero, en caso que el mismo funcionario reincida hasta por tres ocasiones, el reclamo será remitido a la atención del Secretario Permanente del Ministerio de Justicia y Asuntos Jurídicos para su traslado e intervención de la Comisión del Servicio Público. Sin embargo, tratándose de procedimientos disciplinarios en contra de los Magistrados, éstos sólo se seguirán previa decisión de la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos.

[203] En cuanto a la manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su funcionamiento, éstos son previstos por el Secretario Adjunto de la Corte de Magistrados anualmente y transmitidos al Secretario Permanente, quien a su vez los remite al Ministerio de Finanzas para su aprobación con base en el presupuesto anual asignado a cada departamento gubernamental de acuerdo con los términos del capítulo VI de la Constitución y las leyes de asignaciones presupuestarias correspondientes.

[204] En cuanto a los mecanismos de coordinación para armonizar sus funciones con las de otros órganos de control o poderes públicos, la Corte de Magistrados, con base en la información suministrada por el Estado analizado en su respuesta al cuestionario^{53/}, mantiene relaciones de trabajo con el Ministerio de Justicia y Asuntos Jurídicos, el Departamento de Libertad Condicional, la RPF, la Fiscalía General, el Departamento de Medio Ambiente, la Junta de Seguridad Social y los miembros del Colegio de Abogados que comparecen ante la Corte. No obstante, de la misma respuesta se desprende que *“no existen mecanismos de coordinación formales. La conducción de la relación depende del asunto de que se trate.”*

[205] Finalmente, en lo que respecta a los mecanismos de rendición de cuentas, Saint Kitts y Nevis, en su respuesta al cuestionario^{54/}, hace referencia a los recursos de apelación procedentes en contra de decisiones tomadas por los Magistrados, así como a la *autoridad* del Procurador General para asegurar que los Magistrados actúen de conformidad con su contrato y la Ley sobre el Código de Procedimientos para Magistrados.

2.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[206] El Departamento de la Corte de Magistrados cuenta con un conjunto de disposiciones y/o de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 2.1 del presente informe. No obstante, el Comité estima que sería apropiado formular ciertos comentarios en relación con las mismas:

[207] En primer lugar, como se puede observar de la información descrita en la sección anterior, el Comité, en relación con la independencia de la Corte el Magistrados, denota que tanto el Ministerio de Justicia y Asuntos Jurídicos, a través del Ministro de Justicia y Asuntos Jurídicos, perteneciente al Poder Ejecutivo, cuenta con un conjunto de atribuciones que se estima podrían ir en detrimento de la independencia de este órgano jurisdiccional. Dichas atribuciones, entre otras, tienen que ver principalmente con la potestad del Ministerio de Justicia y Asuntos Jurídicos de decidir en cuanto al nombramiento y decisión sobre la renovación de los contratos de los Magistrados de Distrito, la determinación de los recursos humanos necesarios para el funcionamiento de la Corte, así como las

53. Véase respuesta de Saint Kitts y Nevis al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 29, *supra* nota 4.

54. Véase respuesta de Saint Kitts y Nevis al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 29 y 30, *supra* nota 4.

atribuciones de supervisión que tiene sobre su personal, sin perjuicio de la intervención en casos específicos de la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos.

[208] Al respecto, con ocasión de la visita *in situ*, la representación del Departamento de la Corte de Magistrados manifestó que el sistema actual de nombramiento de Magistrados a través de contratos por dos años no les garantiza la seguridad en el cargo necesaria para el adecuado desempeño de sus funciones, lo cual podría perjudicar el cumplimiento de la independencia jurisdiccional que legalmente le compete a este órgano de control. Es por ello que la misma representación puso de presente que desde el ámbito de la Corte Suprema del Caribe Oriental se está promoviendo una iniciativa tendiente a equiparar, entre otros aspectos, el régimen de nombramiento de Magistrados con el de los Jueces de los tribunales superiores del Poder Judicial del Estado analizado^{55/}.

[209] Sin perjuicio que dicha iniciativa podría considerarse como una medida adecuada para fortalecer la independencia y el sistema y procesos de selección de los Magistrados de Distrito, el Comité se reserva el derecho de formular recomendaciones en este sentido, teniendo en cuenta que el análisis de los sistemas para la contratación de funcionarios públicos, incluyendo aquellos en los poderes judiciales, fueron materia de la Segunda Ronda, los cuales serán analizados en su integridad con relación a Saint Kitts y Nevis en la Quinta Ronda, toda vez que durante el desarrollo de la Segunda Ronda el Estado analizado no se encontraba vinculado al Mecanismo.

[210] No obstante lo anterior, en cuanto a la existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las funciones del personal al servicio de la Corte de Magistrados, el Comité, con base en la información recabada durante la visita *in situ*, toma nota del proyecto de colaboración con la Unidad para la Reforma del Sector Público para la elaboración y actualización de las descripciones de puestos del personal a su servicio. Sin embargo, teniendo en cuenta que el trabajo de elaboración de dichas descripciones en el ámbito del Departamento de Recursos Humanos de la Comisión del Servicio Público se ha demorado varios años y que el Estado analizado señala en su respuesta al cuestionario que “*no existe un manual ni otros documentos que describan las funciones de los magistrados, con excepción de los contratos de empleo de los magistrados y la Ley sobre el Código de Procedimientos para Magistrados*”^{56/}, el Comité formulará una recomendación en el sentido de adoptar las medidas que se estimen necesarias para culminar el proceso de elaboración y actualización de las descripciones de puestos de la Corte de Magistrados. (Véase recomendación 2.4.1. de la sección 2.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

[211] Asimismo, el Comité, con base en la información que tuvo a su disposición, no identificó la existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas en el ámbito de la Corte de Magistrados, o de manuales o guías relativas a las mismas, por lo que formulará también una recomendación al respecto. (Véase recomendación 2.4.2. de la sección 2.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

[212] En segundo lugar, en materia de capacitación, el Comité toma nota de la información puesta de presente por la representación del Departamento de la Corte de Magistrados con ocasión de la visita *in situ* en el sentido que, sin perjuicio de los programas de entrenamiento temporales que ofrece el Instituto de Educación Judicial de la Corte Suprema del Caribe Oriental y otros eventos internacionales de capacitación en los que participan los Magistrados y otros funcionarios de la Corte, existe la necesidad de contar con capacitación adecuada y permanente para todos sus funcionarios,

55. Ver *supra* nota 47.

56. Véase respuesta de Saint Kitts y Nevis al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 27, *supra* nota 4.

incluidos los Magistrados, sobre todo en temas relacionados con el correcto enjuiciamiento de los casos que involucren actos de corrupción, así como en materia de ética, probidad y transparencia en la función jurisdiccional. Al respecto, el Comité formulará una recomendación. (Véase recomendación 2.4.3. de la sección 2.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

[213] En tercer lugar, y sin perjuicio de su reciente incorporación al sistema informático JEMS de la Corte Suprema del Caribe Oriental, la representación del Departamento de la Corte de Magistrados durante la visita *in situ* enfatizó su necesidad de contar con equipos y tecnologías informáticos modernos que faciliten el desarrollo de sus labores. Por citar un ejemplo, la misma representación señaló que hoy en día los registros o actas de las audiencias judiciales en las que intervienen los Magistrados son tomadas a mano, lo cual demora considerablemente su registro y archivo. Esta insuficiencia de recursos informáticos, señaló, ha provocado que la carga de trabajo de la Corte se sature día con día en perjuicio de una administración de justicia pronta y expedita. En es por lo anterior que el Comité formulará una recomendación para que se redoblen esfuerzos para dotar a la Corte de Magistrados con este tipo de recursos y así contribuir hacia una administración de justicia más transparente y ágil. (Véase recomendación 2.4.4. de la sección 2.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

[214] En cuarto lugar, en lo que tiene que ver con la disseminación de información en cuanto a los objetivos, funciones y resultados, la representación del Departamento de la Corte de Magistrados reconoció durante la visita *in situ* que no cuentan con los medios ni recursos necesarios que permitan suministrar a la ciudadanía este tipo de información, sin perjuicio de la publicidad que ofrece el sitio en Internet de la Corte Suprema del Caribe Oriental a la que se hizo referencia en la sección anterior. A este respecto, el Comité considera importante, en aras de la transparencia y el acceso a la información, que el Estado analizado considere adoptar las medidas que estime convenientes que permitan a la Corte de Magistrados suministrar a los ciudadanos ese tipo de información. Una alternativa que podría considerarse adecuada para tal fin, sería el desarrollo de un sitio o portal en Internet teniendo en cuenta las bondades que en la actualidad ofrece este tipo de herramienta. (Véase recomendación 2.4.5. de la sección 2.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

[215] En este mismo orden de ideas y teniendo en cuenta la información proporcionada por la representación del Departamento de la Corte de Magistrados con ocasión de la visita *in situ*, el Comité estima que sería beneficioso para el Estado analizado considerar desarrollar campañas de concientización y/u orientación a la ciudadanía acerca de cómo realizar gestiones ante este órgano jurisdiccional. (Véase recomendación 2.4.6. de la sección 2.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

[216] En quinto lugar, en cuanto a los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a su servicio, el Comité toma nota de la iniciativa puesta de presente por la representación del Departamento de la Corte de Magistrados en la visita *in situ* en relación con la implementación de un sistema de buzón de quejas y sugerencias donde los usuarios puedan depositar su opinión respecto al personal y servicios que presta la Corte. El Comité formulará una recomendación al Estado analizado tendiente a fortalecer tales mecanismos que permitan la efectiva imposición de las sanciones que correspondan a quienes incumplan con la normativa disciplinaria que rige a los funcionarios de la Corte. (Véase recomendación 2.4.7. de la sección 2.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

[217] En sexto lugar, en cuanto a la manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su funcionamiento, la representación del Departamento de la Corte de Magistrados señaló que su presupuesto no se ha visto incrementando en más de 10 años, lo que ha provocado una merma en cuanto a la calidad y capacidad de sus instalaciones físicas y herramientas de trabajo, incluidas las tecnológicas como ya se ha hecho referencia. Asimismo, en relación con este tema, la representación del Departamento de la Corte de Magistrados se refirió a la falta de autonomía para el manejo de sus recursos, señalando que, además de tener que solicitar mes con mes la asignación de recursos al Ministerio de Finanzas para el cumplimiento de sus responsabilidades financieras y administrativas, salvo el pago de salarios, su relación con dicho Ministerio es *limitada*. Esta situación, señalaron, ha provocado que en algunos casos la Corte de Magistrados no brinde adecuadamente los servicios que por ley le corresponde proveer a la ciudadanía. El Comité formulará recomendaciones teniendo en cuenta lo anterior. (Véase recomendaciones 2.4.8. y 2.4.9. de la sección 2.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

[218] En séptimo lugar, el Comité toma nota de la información suministrada por el Estado analizado en su respuesta al cuestionario en el sentido de no existir mecanismos formales de coordinación para armonizar las funciones de la Corte de Magistrados con las de otros órganos de control o poderes públicos y para obtener el apoyo de otras autoridades y de la ciudadanía para el cabal cumplimiento de sus funciones, por lo que formulará una recomendación al respecto. (Véase recomendación 2.4.10. de la sección 2.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

[219] Finalmente, en cuanto a los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones, el Comité toma nota de la información suministrada por Saint Kitts y Nevis en su respuesta al cuestionario y de la recaba con ocasión de la visita *in situ*. Sin embargo, con base en la misma, el Comité estima conveniente que el Estado analizado considere adoptar las medidas que se estimen pertinentes a modo de establecer, en el marco de la Corte de Magistrados, mecanismos de rendición de cuentas o la presentación de informes de gestión sobre el cumplimiento de sus funciones y la manera de hacer éstos públicos. (Véase recomendación 2.4.10. de la sección 2.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

2.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[220] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado no proporciona información sobre resultados de la Corte de Magistrados en cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades principalmente aquellas relacionadas con la sanción de prácticas corruptas que generan responsabilidad penal. Lo anterior responde a que, con ocasión de la visita *in situ*, la representación de este órgano de control puso de presente que carece de información estadística sobre el desempeño de sus funciones y atribuciones y que, tratándose de prácticas corruptas, únicamente tiene conocimiento de un caso, el cual se tramitó hace más de 20 años relacionado con cohecho. Con base en lo anterior, el Comité no puede hacer una valoración integral sobre los resultados en este campo y, en este sentido, formulará las recomendaciones correspondientes. (Véase recomendación 2.4.11. de la sección 2.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

2.4. Conclusiones y recomendaciones

[221] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la Corte de Magistrados en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[222] **Saint Kitts y Nevis ha considerado y adoptado ciertas medidas destinadas a mantener y fortalecer a la Corte de Magistrados, como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 2 del literal “B” del capítulo II de este informe.**

[223] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere la siguientes recomendaciones:

- 2.4.1. Adoptar las medidas necesarias para culminar el proceso de elaboración y actualización de las descripciones de puestos de la Corte de Magistrados. (Véase sección 2.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 2.4.2. Elaborar manuales y procedimientos que describan la manera en que se deben desempeñar las labores en el Departamento de Magistrados. (Véase sección 2.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 2.4.3. Dotar a la Corte de Magistrados con los recursos financieros necesarios para asegurar la capacitación adecuada y permanente de todos sus funcionarios, incluidos los Magistrados, brindando especial atención a los casos que involucren actos de corrupción, así como en materia de ética, probidad y transparencia en la función jurisdiccional, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos. (Véase sección 2.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 2.4.4. Dotar a la Corte de Magistrados con equipos y sistemas informáticos y tecnologías modernas que le permita, entre otros aspectos, brindar una administración de justicia transparente, pronta y expedita. (Véase sección 2.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 2.4.5. Adoptar las medidas adecuadas que permitan a la Corte de Magistrados suministrar a los ciudadanos información en cuanto a sus objetivos, funciones y resultados, pudiendo considerar, como una alternativa para este fin, el desarrollo de un sitio o portal en Internet. (Véase sección 2.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 2.4.6. Desarrollar campañas de concientización y/u orientación a la ciudadanía acerca de cómo realizar gestiones ante la Corte de Magistrados. (Véase sección 2.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 2.4.7. Fortalecer los mecanismos de control interno, incluidos los de atención de reclamos, quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal al servicio de la Corte de Magistrados, mediante la adopción de las medidas necesarias para la efectiva imposición de las sanciones que correspondan a quienes incumplan con la normativa disciplinaria que rige a los funcionarios de dicha Corte. (Véase sección 2.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 2.4.8. Dotar a la Corte de Magistrados con los recursos financieros necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones, principalmente aquellas relacionadas con la sanción de prácticas corruptas que generan responsabilidad penal, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos. (Véase sección 2.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).

- 2.4.9. Adoptar las medidas pertinentes para que la Corte de Magistrados pueda contar con una mayor injerencia y autonomía en la determinación y manejo de sus recursos presupuestales. (Véase sección 2.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 2.4.10. Implementar mecanismos de coordinación, cuando corresponda, entre la Corte de Magistrados, la RFP, el Ministerio de Justicia y Asuntos Jurídicos, la Procuraduría General y la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otras dependencias, que velen por el establecimiento de procedimientos y/o lineamientos efectivos y oportunos para el adecuado enjuiciamiento de los procesos penales relacionados con actos de corrupción. (Véase sección 2.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 2.4.11. Adoptar, en el ámbito de competencia de la Corte de Magistrados, las medidas pertinentes a fin de establecer mecanismos de rendición de cuentas, tales como la presentación de informes de gestión sobre el cumplimiento de sus funciones y procedimientos para la difusión de los mismos entre el público. (Véase sección 2.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 2.4.12. Elaborar información estadística relativa a los procesos judiciales presentados ante la Corte de Magistrados en relación con las prácticas corruptas que permita conocer cuántos casos se encuentran en curso, el número de asuntos que han sido desestimados, cuántos han sido desestimados por prescripción, cuántos han sido desestimados sin que se haya podido adoptar una decisión sobre los mismos, cuántos están listos para adoptar una decisión, o cuántos ya han sido objeto de una decisión de fondo y el sentido absolutorio o condenatorio de dicha decisión, en orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas. (Véase sección 2.3. del literal “B” del capítulo II de este informe).

3. EL OMBUDSMAN

3.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[224] El *Ombudsman* cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[225] De conformidad con lo expuesto por el Estado analizado en su respuesta al cuestionario^{57/}, la figura del *Ombudsman* se estableció en Saint Kitts y Nevis para proteger y hacer efectivos los derechos de sus ciudadanos, teniendo entre sus objetivos los de contribuir al desarrollo de una cultura de la función pública caracterizada por equidad, dedicación, compromiso, apertura, rendición de cuentas y promoción del derecho a una buena gestión pública.

[226] En cuanto a sus funciones, la sección 9 de la parte II de la Ley del *Ombudsman*^{58/} vigente a partir de julio de 2008, establece, entre otros aspectos, que las funciones del *Ombudsman* consisten en prestar apoyo a las personas que estiman que han sufrido injusticias por parte de funcionarios públicos como resultado de una mala administración. Estas funciones también incluyen la investigación de cualquier acción administrativa de una autoridad con el fin de decidir si hay evidencias de mala administración por parte de la autoridad. Adicionalmente, el *Ombudsman* está facultado para formular recomendaciones a las autoridades en lo concerniente a cualquier acción

57. Véase respuesta de Saint Kitts y Nevis al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 30, *supra* nota 4.

58. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_kna_ombudsman_act.pdf

administrativa que haya sido sujeto de la investigación y, en general, sobre formas de mejorar sus prácticas y procedimientos administrativos; así como cualesquiera otras funciones que le pueda conferir la Ley.

[227] Con respecto al alcance de sus funciones, en virtud de la misma sección 9, el cometido del *Ombudsman* se limita principalmente a la investigación de quejas contra autoridades locales y a formular las recomendaciones necesarias para mejorar el problema objeto de la queja. Sin embargo, la sección 15 de la Ley del *Ombudsman* señala que puede recurrir a la mediación si considera que las circunstancias lo ameritan. Asimismo, el mecanismo que existe de conformidad con la sección 9(4) de la Ley para la resolución de cualquier conflicto de jurisdicción en relación con el *Ombudsman* que pueda generarse en su investigación de un caso es que el *Ombudsman* o el demandante pueden solicitar a los tribunales una orden declaratoria de la jurisdicción del *Ombudsman*.

[228] En relación con las restricciones sobre su jurisdicción de investigar, la sección 10 de la Ley dispone que cuando bajo cualquier disposición jurídica exista un derecho de apelación u objeción ante un tribunal o el derecho de solicitar a una corte un recurso con respecto a acciones administrativas emprendidas por una autoridad, el *Ombudsman* no investigará dicha acción sino hasta que tal derecho de apelación, objeción o solicitud se hayan ejercido y determinado o en tanto no haya expirado el derecho de apelación, objeción o solicitud. Pero, sin perjuicio de lo anterior, el *Ombudsman* puede investigar cualquier acción administrativa de una autoridad en circunstancias en que el denunciante tiene o ha tenido tal derecho o recurso si está convencido de que en las circunstancias concretas no es razonable esperar que la persona recurra o haya recurrido a él.

[229] Asimismo, la Ley no autoriza al *Ombudsman* a emprender una investigación que se relacione con cualquier acción o asunto de los especificados en su Primera Cláusula^{59/}; sin embargo, el Gobernador General puede, mediante orden sujeta a resolución afirmativa, modificar la Primera Cláusula.

[230] En lo que tiene que ver con la manera en la que se adoptan sus decisiones, con base en la información suministrada por el Estado analizado en su respuesta al cuestionario^{60/} y la recabada durante la visita *in situ*, el *Ombudsman* en todo momento actúa de manera independiente e imparcial y no toma parte en el proceso de investigación de cualquier denuncia, rigiéndose para ello por lo dispuesto en las secciones 11 a 15 y demás aplicables de la Ley del *Ombudsman*.

[231] Sobre la manera en que es provisto el cargo de *Ombudsman*, la sección 4 de la Ley dispone que éste será nombrado por el Gobernador General previa consulta con el Primer Ministro y el Líder de la Oposición y permanecerá en el cargo hasta cumplir los 70 años de edad de acuerdo con la sección 5(1) del mismo ordenamiento. No pueden servir como *Ombudsman* los miembros de la Asamblea Nacional, las personas declaradas en bancarrota sin rehabilitación o aquellas declaradas culpables de cualquier delito que implique deshonestidad o baja moral.

59. La Primera Cláusula especifica como acciones no sujetas a investigación las siguientes: (1) Acciones administrativas que, en virtud de cualquier disposición constitucional, no pueden ser sujeto de investigaciones por ningún tribunal. (2) Cualquier acción administrativa adoptada por el Gabinete o por un Ministro o Viceministro. (3) Acciones administrativas emprendidas con el fin de investigar un delito o proteger la seguridad de Saint Kitts y Nevis. (4) El inicio o conducción de cualquier procedimiento, sea civil o penal, ante una corte de justicia o tribunal en Saint Kitts y Nevis, incluida cualquier decisión de enjuiciar o no a cualquier persona por una infracción. (5) Cualquier acción administrativa adoptada con respecto a nombramientos o despidos, pago, disciplina, pensión u otro asunto relativo al personal en relación con el servicio en cualquier puesto o empleo en la función pública o bajo cualquier autoridad.

60. Véase respuesta de Saint Kitts y Nevis al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 31, *supra* nota 4.

[232] La misma sección 4 dispone que el *Ombudsman* puede ser destituido de su cargo solamente por incapacidad de desempeñar las funciones de su puesto ya sea por enfermedad física o mental o por cualquier otra causa o por mala conducta y que no se le destituirá excepto de conformidad con lo dispuesto en esta sección, la cual establece también el procedimiento de remoción a seguir.

[233] La parte VI de la Ley dispone el régimen de recursos humanos al servicio del *Ombudsman*, señalando que será el *Ombudsman* quien los determine. Una vez determinados, será el Departamento de Recursos Humanos de Saint Kitts y Nevis la entidad responsable de su correspondiente contratación. Específicamente, la sección 24 de la Ley indica que con base en las necesidades de recursos humanos del despacho del Ombudsman, es aceptable el nombramiento del número de funcionarios públicos que se requieran para asistirlo en el cumplimiento de sus funciones. La Ley indica también que el *Ombudsman* puede, además, contratar en ocasiones a los asesores técnicos o profesionales que sean necesarios para asistir en el cumplimiento de sus funciones. Toda persona designada según esta sección se sujetará a la dirección y el control del *Ombudsman* en el desempeño de sus funciones.

[234] En relación con lo anterior, es importante señalar lo que se desprende tanto de la información suministrada por el Estado analizado en su respuesta al cuestionario como de la recaba durante la visita *in situ*, en el sentido que, desde su creación en 2008 hasta la fecha, el *Ombudsman* es la única persona empleada en su oficina.

[235] Respecto a la existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las funciones del personal a su servicio, así como de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o de manuales o guías relativas a las mismas, el *Ombudsman* cuenta sólo con las disposiciones contenidas en la Ley del *Ombudsman*.

[236] A pesar de ser la única persona empleada en su oficina, el *Ombudsman* de Saint Kitts y Nevis, además de ser miembro de la Asociación Caribeña de *Ombúdsmanes* (CAROA, por sus siglas en inglés) y asistir a sus conferencias y talleres de capacitación. También ha participado en algunos foros internacionales para recibir capacitación principalmente en materia de derechos humanos.

[237] Sobre la manera en que el *Ombudsman* suministra información a los ciudadanos acerca de sus objetivos y funciones, les da a conocer los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus funciones y los orienta acerca de cómo realizar gestiones ante él, el Estado analizado señala en su respuesta al cuestionario^{61/} que *en el pasado* se ha invitado a miembros del público a reuniones convocadas por el *Ombudsman* en un intento por crear conciencia entre el público sobre la existencia de su cargo y las funciones y servicios que se ofrecen a la ciudadanía. Los miembros del público pueden libremente acudir al despacho del *Ombudsman* para obtener información relativa a datos pertinentes sobre su cargo y sus funciones.

[238] Finalmente, con respecto a la manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su funcionamiento, con base en la información recabada durante la visita *in situ*, éstos son previstos por el *Ombudsman* anualmente y transmitidos al Secretario Permanente, quien a su vez los transmite al Ministerio de Finanzas para su aprobación con base en el presupuesto anual asignado a cada departamento gubernamental de acuerdo con los términos del capítulo VI de la Constitución y las asignaciones presupuestarias anuales correspondientes.

61. Véase respuesta de Saint Kitts y Nevis al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 33, *supra* nota 4.

3.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[239] El *Ombudsman* cuenta con un conjunto de disposiciones y/o de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 3.1 del presente informe. No obstante, el Comité estima que sería apropiado formular ciertos comentarios en relación con las mismas:

[240] En primer lugar, como se desprende de la información descrita en la sección anterior, preocupa al Comité que desde su creación en 2008, la oficina del *Ombudsman* cuente únicamente con una persona, el *Ombudsman*, para el cumplimiento del amplio conjunto de funciones y responsabilidades que por mandato legal le competen.

[241] Esta situación fue abordada durante la visita *in situ*, en donde se puso de presente que ésta responde a los procesos de restructuración de la deuda extranjera del Estado, que exigen, entre otras medidas, el no incremento del presupuesto nacional, lo cual ha provocado que en los últimos seis años la partida presupuestal del *Ombudsman* se mantenga congelada, imposibilitado, en consecuencia, la contratación de personal y demás recursos que requiere para el cumplimiento de sus atribuciones.

[242] Sin perjuicio de lo anterior, así como de la información puesta de presente por el Estado analizado tanto en su respuesta al cuestionario⁶² como con ocasión de la visita *in situ*, en cuanto a la voluntad política y proyecciones a futuro del Gobierno de Saint Kitts y Nevis para fortalecer a este órgano, el Comité formulará una recomendación para que a la brevedad se adopten las medidas necesarias tendientes a incrementar y garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para el efectivo funcionamiento de la oficina del *Ombudsman*. (Véase recomendación 3.4.1. de la sección 3.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

[243] En segundo lugar, con ocasión de la visita *in situ*, el *Ombudsman* compartió información acerca del trabajo e investigaciones que ha venido adelantando desde la creación de esta oficina, así como de las recomendaciones formuladas en razón de dichas investigaciones, las cuales, señaló, no son vinculantes para los ministerios y demás entidades y funcionarios públicos sujetas a su labor de supervisión, aunque, por lo general, dijo, son usualmente cumplidas. Sin embargo, teniendo en cuenta la importancia del trabajo que viene llevando a cabo el *Ombudsman*, pese a su escasez de recursos, el Comité sugiere al Estado analizado que considere la posibilidad de adoptar las medidas necesarias a modo de asegurar el efectivo cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el *Ombudsman* en sus investigaciones por parte de las entidades públicas sujetas a su supervisión. (Véase recomendación 3.4.2. de la sección 3.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

[244] En tercer lugar, el Comité observa que de acuerdo con lo dispuesto en la parte VI de la Ley del *Ombudsman* descrita en la sección anterior, que establece el régimen de los recursos humanos de esta oficina, pareciera que dicho personal estaría sujeto a un sistema de libre nombramiento y remoción.

[245] A este respecto y sin perjuicio que el análisis de los sistemas para la contratación de funcionarios públicos a que se refiere el párrafo 5° del artículo III de la Convención, que fueron materia de la Segunda Ronda, serán analizados en su integridad con relación a Saint Kitts y Nevis en la Quinta Ronda, toda vez que durante el desarrollo de la Segunda Ronda el Estado analizado no se encontraba vinculado al Mecanismo, el Comité considera oportuno sugerir que en virtud que no se ha

62. Véase respuesta de Saint Kitts y Nevis al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 32, *supra* nota 4.

contratado personal adicional al *Ombudsman* mismo desde la creación de esta oficina, al momento de aplicarse las disposiciones contenidas en la parte VI de la Ley del *Ombudsman* para la eventual contratación de los recursos humanos necesarios para su funcionamiento, el Estado analizado considere adoptar las medidas que estime necesarias que garanticen que dicha contratación se realice con base en el mérito y en los principios de equidad, publicidad y eficiencia consagrados en la Convención. (Véase recomendación 3.4.3. de la sección 3.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

[246] En este mismo orden de ideas y en aras de fortalecer el correcto cumplimiento de las funciones que se le asignen al eventual personal que se asigne al servicio del *Ombudsman*, el Comité estima conveniente que el Estado analizado considere la posibilidad de desarrollar manuales u otros documentos en los que se describan las funciones y se establezcan las medidas que aseguren que dicho personal recibirá la capacitación necesaria en relación con las funciones que le sean encomendadas. (Véase recomendaciones 3.4.4. y 3.4.5. de la sección 3.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

[247] En cuarto lugar, si bien la Ley del *Ombudsman* prevé guías para el cumplimiento de sus responsabilidades, el Comité sugiere igualmente que el Estado analizado considere desarrollar un manual de procedimientos o guías para el desempeño de las tareas del *Ombudsman* y del eventual personal que pueda ser asignado a esta dependencia, las cuales contribuirían a un mejor y más eficiente cumplimiento de las tareas que le son encomendadas. (Véase recomendación 3.4.6. de la sección 3.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

[248] En quinto lugar, si bien la creación de la oficina del *Ombudsman* es relativamente reciente, el Comité, con base en la información suministrada por Saint Kitts y Nevis en su respuesta al cuestionario en el sentido que “... *se dispone de planes para ofrecer acciones para el fortalecimiento institucional y la mejora de la calidad. No obstante, hasta la fecha se siguen haciendo esfuerzos en este sentido, que el mismo Ombudsman está tratando de cristalizar*”^{63/}, sumado a las necesidades puestas de presente por el *Ombudsman* con ocasión de la visita *in situ*, estima importante que el Estado analizado considere redoblar esfuerzos tendientes a desarrollar e implementar acciones efectivas de fortalecimiento institucional que incluyan, entre otros aspectos, espacios físicos adecuados para el personal al servicio del *Ombudsman* con equipos informáticos modernos que faciliten el desarrollo de sus labores. (Véase recomendación 3.4.7. de la sección 3.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

[249] En sexto lugar, el Comité sugiere también que en aras de la transparencia y acceso a la información, el Estado analizado redoble igualmente esfuerzos para que la oficina del *Ombudsman* cuente con los recursos y herramientas necesarias que le permita difundir y suministrar a los ciudadanos información acerca de sus objetivos y funciones, darles a conocer los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus funciones y orientarlos acerca de cómo realizar gestiones ante el mismo, teniendo en cuenta sobre todo que una de las principales responsabilidades del *Ombudsman* consiste en prestar apoyo a las personas que estiman que han sufrido injusticias por parte de funcionarios públicos como resultado de una mala administración. (Véase recomendación 3.4.8. de la sección 3.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

63. Véase respuesta de Saint Kitts y Nevis al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 33, *supra* nota 4.

[250] En séptimo lugar, como se desprende de la respuesta de Saint Kitts y Nevis al cuestionario en el sentido que “*la Ley del Ombudsman no incluye específicamente ningún procedimiento para presentar quejas, reclamos o denuncias en contra del Ombudsman o su personal...*”^{64/} el Comité formulará una recomendación, sin perjuicio del procedimiento estándar al que se hace referencia en la misma respuesta. (Véase recomendación 3.4.9. de la sección 3.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

[251] En octavo lugar, tanto de la respuesta al cuestionario como de la información recabada durante el visita *in situ*, el Comité denota la inexistencia de mecanismos de coordinación para armonizar las funciones del *Ombudsman* con las de otros órganos de control o poderes públicos y para obtener el apoyo de otras autoridades y de la ciudadanía para el cabal cumplimiento de sus funciones y, en este sentido, formulará una recomendación. (Véase recomendación 3.4.10. de la sección 3.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

[252] Finalmente, en cuanto a los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones, el Comité, teniendo en cuenta que la Ley no especifica ante quién es responsable el *Ombudsman* en el desempeño de sus deberes, estima conveniente que el Estado analizado considere adoptar las medidas que se estimen pertinentes a modo de establecer, en el marco del *Ombudsman*, mecanismos de rendición de cuentas o la presentación de informes de gestión sobre el cumplimiento de sus funciones y la manera de hacer éstos públicos. (Véase recomendación 3.4.11. de la sección 3.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

3.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[253] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado no proporciona información sobre resultados del *Ombudsman* en cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades principalmente aquellas relacionadas con prestar apoyo a las personas que estiman que han sufrido injusticias por parte de funcionarios públicos como resultado de una mala administración y con la investigación de cualquier acción administrativa de una autoridad a fin de decidir si hay evidencias de mala administración por parte de la autoridad. Con base en lo anterior, el Comité no puede hacer una valoración integral sobre los resultados en este campo y, en este sentido, formulará las recomendaciones correspondientes. (Véase recomendación 3.4.12. de la sección 3.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

3.4. Conclusiones y recomendaciones

[254] Con base en el análisis integral realizado con respecto al *Ombudsman* en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[255] Saint Kitts y Nevis no ha considerado ni adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer al *Ombudsman*, como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 3 del literal “B” del capítulo II de este informe.

[256] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere la siguientes recomendaciones:

64. Véase respuesta de Saint Kitts y Nevis al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 34, *supra* nota 4.

- 3.4.1. Adoptar a la brevedad las medidas pertinentes para dotar al *Ombudsman* con los recursos humanos y financieros necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones legales, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos. (Véase sección 3.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 3.4.2. Establecer mecanismos que aseguren que las entidades públicas sujetas a su supervisión por el *Ombudsman* den el efectivo cumplimiento de las recomendaciones emitidas mediante sus investigaciones. (Véase sección 3.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 3.4.3. Adoptar las medidas pertinentes que garanticen que los procesos de contratación de personal en el ámbito del *Ombudsman* se realicen con sujeción a los principios de mérito, equidad, publicidad y eficiencia consagrados en la Convención. (Véase sección 3.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 3.4.4. Desarrollar manuales u otros documentos de apoyo en los que se describan las funciones que debe desempeñar el personal al servicio del *Ombudsman*. (Véase sección 3.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 3.4.5. Adoptar las medidas pertinentes que aseguren que el personal adscrito a la oficina del *Ombudsman* cuente con capacitación periódica que fortalezca sus capacidades, conocimientos y habilidades. (Véase sección 3.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 3.4.6. Desarrollar procedimientos documentados, manuales o guías para el desarrollo de las tareas del *Ombudsman* y del personal a su servicio. (Véase sección 3.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 3.4.7. Desarrollar e implementar acciones que favorezcan el fortalecimiento institucional, incluyendo la mejora de espacios físicos adecuados para el adecuado desempeño de los funcionarios adscritos a la oficina del *Ombudsman* que garanticen la existencia y funcionamiento de equipos informáticos modernos para el cumplimiento de sus labores. (Véase sección 3.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 3.4.8. Dotar a la oficina del *Ombudsman* con los recursos y herramientas necesarias que permitan difundir y suministrar a los ciudadanos información acerca de sus objetivos, misiones y funciones, darles a conocer los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus funciones y orientarlos acerca de cómo realizar gestiones ante el mismo, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos. (Véase sección 3.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 3.4.9. Desarrollar mecanismos de control interno para la atención de reclamos, quejas o denuncias relacionadas las facultades conferidas para el cumplimiento de los objetivos del *Ombudsman* y con el desempeño del personal a su servicio. (Véase sección 3.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 3.4.10. Desarrollar mecanismos de coordinación para armonizar las funciones del *Ombudsman* con las de otros órganos de control o poderes públicos y para obtener el apoyo de otras autoridades y de la ciudadanía para el cabal cumplimiento de sus funciones. (Véase sección 3.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).

- 3.4.11. Adoptar las medidas que se estimen pertinentes a modo de establecer, en el marco del *Ombudsman*, mecanismos de rendición de cuentas o la presentación de informes de gestión sobre el cumplimiento de sus funciones y la manera de hacer éstos públicos. (Véase sección 3.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 3.4.12. Elaborar información estadística sobre los resultados de las denuncias recibidas por el *Ombudsman* de los ciudadanos que consideran que han sido víctimas de injusticias por parte de algún funcionario público, que permita conocer cuántas de estas denuncias fueron desechadas y por qué; cuántas dieron lugar a un proceso de investigación y el resultado de dichas investigaciones; si como resultado de dicha investigación se estableció alguna responsabilidad o sanción a la autoridad investigada o si se dictó una sentencia absolutoria al funcionario o autoridad investigada; cuántas investigaciones han llegado a tener un efecto en la instancia investigada para adoptar la recomendación correspondiente y el número de recomendaciones efectivamente implementadas, para estar en posibilidad de determinar cuáles son los principales retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas. (Véase sección 3.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).

4. REAL FUERZA POLICIAL DE SAINT KITTS Y NEVIS

4.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[257] La RPF cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[258] De conformidad con lo dispuesto en la sección 5(1) de la Ley de la Policía^{65/}, la RPF tiene como objetivo primordial prevenir y detectar delitos y mantener la ley y el orden en Saint Kitts y Nevis.

[259] En cuanto al ámbito de sus funciones, la sección 5(2) de la Ley dispone que la RPF puede aprehender o arrestar a personas que estén cometiendo un delito; confiscar los bienes de personas para contribuir a la detección de un delito según la ley; frenar, catear y detener cualquier navío o persona cuando razonablemente opina que en ellos puede encontrarse cualquier cosa robada u obtenida ilícitamente; citar a cualquier persona acusada de un delito para que comparezca ante la corte y enjuiciar a cualquier persona que sea atrapada cometiendo un delito o si razonablemente se opina que ha cometido un delito. La RPF también es responsable de reprimir disturbios internos, defender al Estado de fuerzas externas y mantener el orden en las inmediaciones de la corte y en la comunidad en general. La sección 6(1) de la Ley de Policía define y proporciona los casos en que un policía puede ejercer su poder de arresto con o sin una orden de detención.

[260] Con respecto a la manera en que adopta sus decisiones de instituir cargos y de llevar a cabo investigaciones, lo hace en consulta con el DPP (*asesoría previa a la institución de cargos*) en relación con algunos tipos de delitos. Por ejemplo, en lo que toca a asuntos relativos a la Corte Superior, el Jefe de la Policía y el Auxiliar del Jefe de la Policía le darían su opinión al DPP con respecto a si se debe instituir el cargo. Con respecto a asuntos magisteriales, los comisarios que están investigando el caso, junto con el Inspector de Policía, expresan su opinión al DPP en relación con si se debe enjuiciar un delito. En circunstancias especiales, cuando el asunto es de carácter sexual, se

puede involucrar al Jefe de la Policía y a su Auxiliar. Adicionalmente, el DPP está autorizado para detener un juicio iniciado por un *fiscal policial* y atraerlo en cualquier momento.

[261] En relación con los asuntos internos de la RPF, las decisiones son tomadas por su alto mando, que comprende al Jefe de la Policía, el Subjefe de la Policía, y el Comisionado Adjunto.

[262] Sobre el nombramiento de los altos mandos anteriores, así como de los Superintendentes y otros oficiales subordinados, la sección 10 de la Ley, en concordancia con la sección 85 constitucional, señala que el Jefe de la Policía, el Subjefe de la Policía y el Comisionado Adjunto de la Policía serán designados por el Gobernador General de conformidad con la asesoría de la Comisión del Servicio de Policía^{66/} tras consultar al Primer Ministro. Cualquier nombramiento a la RPF de una persona al grado de superintendente, auxiliar del superintendente, inspector, sargento, cabo, comisario o comisario especial correrá a cargo del Gobernador General, de acuerdo con la recomendación de la Comisión.

[263] En cuanto a las instancias competentes para exigir responsabilidad por sus actuaciones, la sección 23 de la Ley dispone que de conformidad con las recomendaciones de la Comisión, el Gobernador General puede, por ineficiencia, reducir a cualquier oficial de policía registrado en la Gaceta a una clasificación más baja, excepto que antes de que la Comisión le recomiende al Gobernador General que reduzca la clasificación del Jefe de la Policía y del Subjefe de la Policía deberá consultar primero al Primer Ministro.

[264] Con relación a la manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su funcionamiento y en la que son provistos los mismos, con ocasión de la visita *in situ*, la representación de la RPF señaló que además de publicarse continuamente vacantes en el sitio [web sknpolice.com/jobs.html](http://web.sknpolice.com/jobs.html), cualquier interesado en ingresar a la RPF, aun sin existir vacante de por medio, puede aplicar ante la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la RPF en cualquier momento. Una vez presentada la solicitud, el sargento de su distrito se comunica con la persona; posteriormente se espera que la persona presente un examen y se sujete a una verificación de antecedentes que toma alrededor de seis meses. Una vez que el solicitante ha aprobado el examen y la verificación de antecedentes, debe someterse a un examen médico y una vez que ha sido aceptado por la Comisión será sujeto a un programa de capacitación y entrenamiento dependiendo el área a la cual haya sido asignado por un periodo aproximado de seis meses.

[265] Al respecto, es preciso señalar que sólo el Departamento Financiero de la RPF cuenta con personal civil, el resto de las atribuciones y responsabilidades de la RPF son desarrolladas por policías nombrados mediante el procedimiento previamente descrito, quienes están sujetos al régimen de responsabilidad por sus actuaciones previsto en la parte VII de la Ley de Policía y otras disposiciones aplicables de las Normas y Órdenes Estatutarias Policiales.

[266] Con relación a la existencia de manuales u otros documentos que describan las funciones del personal a su servicio, así como de procedimientos documentados, manuales o guías para el desarrollo de sus tareas, con base en la información suministrada por el Estado analizado en su respuesta al cuestionario^{67/}, la RPF cumple las mismas con sujeción a la Constitución, la Ley de Policía, las Órdenes Permanentes Policiales y las Normas y Órdenes Estatutarias Policiales.

66. Véase la sección 84 de la Constitución.

67. Véase respuesta de Saint Kitts y Nevis al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 37, *supra* nota 4.

[267] En materia de capacitación, además de los cursos de entrenamiento a los que están sujetos los oficiales de recién ingreso, la RPF cuenta con un instituto de capacitación que imparte periódicamente cursos de adiestramiento a sus miembros en aspectos propios de la labor policial. Asimismo, con base en la información suministrada por el Estado analizado y la recabada durante la visita *in situ*, los miembros de la RPF reciben también cierto tipo de capacitación en determinadas áreas que ofrece el DPP y otros oficiales policiales, agencias y funcionarios gubernamentales, además de participar en eventos auspiciados por agencias regionales e internacionales. Sobre este mismo tema, durante la visita *in situ* la representación de la RPF aludió también al nuevo currículo de capacitación que viene desarrollando con la Organización de los Estados del Caribe Oriental (OECS, por sus siglas en inglés) sobre el Sistema de Seguridad Regional.

[268] En lo que tiene que ver con acciones de fortalecimiento institucional o de mejoramiento de calidad implementadas, la representación de la RPF se refirió, entre otros aspectos, a los apoyos que en años recientes ha venido recibiendo de algunos Estados miembros de la OEA y otros para el mejoramientos de sus instalaciones físicas y de dotación de equipos, vehículos, materiales y herramientas policiales, así como sobre el desarrollo de nuevos sistemas informáticos que faciliten el desarrollo de sus labores.

[269] Con relación a la manera en la que se suministra información a la ciudadanía acerca de los objetivos y responsabilidades de la RPF, y sobre los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus funciones y orientarla acerca de cómo realizar gestiones ante la misma, la RPF cuenta, en primer lugar, con el sitio *web* institucional www.sknpolice.com, el cual, además de proveer información general sobre la institución, provee consejos para la prevención de los delitos y sobre seguridad en general. El mismo sitio *web* contiene un enlace a la iniciativa “*Crime Stoppers*” tendiente a concientizar y promover entre la ciudadanía la denuncia de cualquier conducta criminal.

[270] La RPF también cuenta con un perfil en la red social *Facebook*^{63/} que suministra información actualizada sobre sus acciones de prevención y detección de delito. Asimismo, con ocasión de la visita *in situ*, la representación de la RPF se refirió a los espacios de radio y televisión local con que cuenta y que le permiten difundir entre la ciudadanía información y consejos en materia de seguridad. La RPF también realiza charlas en comunidades del Estado analizado sobre prevención de la criminalidad y participa en eventos públicos organizados por escuelas y universidades, entre otros.

[271] Con relación a los mecanismos de control interno, la RPF cuenta con un Director de Asuntos Internos que atiende los reclamos, quejas o denuncias relativas a la consecución de los objetivos de la policía y a su desempeño. Las quejas de naturaleza disciplinaria son oídas y determinadas de conformidad con la sección 64 de la Ley, que señala que cuando se presentan quejas en contra de un comisario de policía subordinado o un comisario especial por infracción de reglamentos disciplinarios, la Comisión del Servicio de Policía puede recomendarle al Gobernador General que el caso sea oído y un funcionario registrado en la Gaceta determine el cargo. Las quejas presentadas en contra de los sargentos pueden ser determinadas por el Jefe de la Policía según las instrucciones del Gobernador General de conformidad con la recomendación de la Comisión. En caso de que las quejas sean planteadas en contra del Jefe de la Policía o del Subjefe de la Policía, la Comisión no le formulará ninguna recomendación al Gobernador General sin haber consultado previamente al Primer Ministro.

63. Véase: <http://m.facebook.com/RoyalStChristopherAndNevisPoliceForce>

[272] Cabe señalar que con ocasión de la visita *in situ* la representación de la RPF se refirió a la campaña que viene adelantando el actual Jefe de Policía para exhortar a la población a acudir a cualquier comandancia para presentar sus reclamos, quejas o denuncias relacionadas con el desempeño de los policías. Lo anterior con la intención de incentivar a la ciudadanía a acudir a la autoridad sin temor a sufrir represalias por haber denunciado. Muchas veces los ciudadanos no se atreven a denunciar a las autoridades adscritas al lugar donde viven, pues temen sufrir alguna consecuencia, sin embargo cuando existe la posibilidad de presentar irregularidades ante una autoridad distinta la adscrita a su domicilio, se observó que la ciudadanía si presentaba quejas.

[273] En cuanto a la manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su funcionamiento, como se desprende de la respuesta del Estado analizado al cuestionario^{69/}, existe un Funcionario Financiero de la RPF que se encarga de los recursos presupuestarios. Se compilan estimaciones de los fondos requeridos tras consultar con el Alto Mando y con el Secretario Permanente de la Oficina del Primer Ministro. Estas estimaciones forman parte del presupuesto para la Oficina del Primer Ministro bajo la Unidad Anticrimen. Las necesidades presupuestales de la RPF son provistas por el Gobierno a través de la Oficina del Primer Ministro bajo la Unidad Anticrimen. Asimismo, es preciso señalar la RPF también percibe cierto tipo de recursos de la cooperación internacional y de otras agencias de la iniciativa privada para apoyar el desarrollo de sus labores según se informó durante la vista *in situ*.

[274] Sobre los mecanismos de coordinación para armonizar sus funciones con las de otros órganos de control o poderes públicos y para obtener el apoyo de otras autoridades y de la ciudadanía para el cabal cumplimiento de sus funciones, el papel de la policía en relación con cada departamento es circunscrita por ley. En este sentido, la RPF trabaja con muchas agencias para cumplir sus responsabilidades: aduanas, el departamento de bomberos, el ejército, la Corte Suprema del Caribe Oriental, el Departamento de la Corte de Magistrados, la DPP y la Unidad Anticrimen dentro de la Oficina del Primer Ministro. Asimismo, con ocasión de la visita *in situ* la representación de la RPF se refirió a los mecanismos de cooperación y coordinación existentes con las agencias de seguridad privada, las cuales ejercen algunas funciones similares a las de la RPF.

[275] Finalmente, en lo que tiene que ver con los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones, las Normas y Órdenes Estatutarias Policiales incluyen disposiciones según las cuales los funcionarios de policía pueden ser disciplinados por no cumplir con su deber. Asimismo, la Dirección de Asuntos Internos se cerciora de que estos funcionarios rindan cuentas y, de acuerdo con la respuesta de Saint Kitts y Nevis al cuestionario^{70/}, la información al respecto es accesible al público en general en la jefatura de policía.

[276] Sumado a lo anterior, durante la visita *in situ* la representación de la RPF también señaló que anualmente presentan un informe sobre su gestión e investigaciones al Primer Ministro a través de la Unidad Anticrimen, empero dicho documento es de carácter confidencial.

4.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[277] La RPF cuenta con un conjunto de disposiciones y/o de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 4.1 del presente informe. No obstante, el Comité estima que sería apropiado formular ciertos comentarios en relación con las mismas:

69. Véase respuesta de Saint Kitts y Nevis al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 37, *supra* nota 4.

70. Véase respuesta de Saint Kitts y Nevis al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 39, *supra* nota 4.

[278] En primer lugar, si bien el Estado analizado señala en su respuesta que la RPF cuenta con documentos en los que se describen las funciones del personal a su servicio, entre ellos la Constitución, la Ley de Policía, las Órdenes Permanentes Policiales y las Normas y Órdenes Estatutarias Policiales; con ocasión de la visita *in situ* se puso de presente la creación reciente de un grupo de trabajo que, con el apoyo de oficiales de la policía local y otros oficiales retirados de Canadá y Estados Unidos, iniciará un proceso de revisión y actualización de las Órdenes Permanentes Policiales y otras normas internas de operaciones, las cuales, al igual que los cuerpos normativos señalados, regulan el actuar de la RPF.

[279] No obstante lo anterior, en ese conjunto de disposiciones el Comité no identificó la existencia de procedimientos documentados, manuales o guías que versen sobre las tareas de investigación de actos de corrupción, por lo que estima conveniente que el Estado analizado considere adoptar las medidas necesarias para que la RPF cuente con dichos procedimientos, manuales y/o guías, pudiendo para estos efectos aprovechar oportunidad que podría brindar el citado proceso de revisión y actualización de las Órdenes Permanentes Policiales y otras normas internas de operaciones. (Véase recomendación 4.4.1. de la sección 4.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

[280] Asimismo, el Comité estima conveniente que Saint Kitts y Nevis considere adoptar las medidas necesarias para que, si corresponde, los documentos propuestos anteriormente, así como la normativa que rige a la RPF, incluyendo la Ley de Policía, las Normas y Órdenes Estatutarias Policiales, las Órdenes Permanentes Policiales y otras normas internas de operaciones estén disponibles para su consulta en el sitio *web* oficial de la RPF y con ello facilitar aún más el conocimiento de los objetivos y funciones de la institución por parte de la ciudadanía, así como los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus funciones. (Véase recomendación 4.4.2. de la sección 4.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

[281] En segundo lugar, el Comité reconoce los esfuerzos de la RFP descritos en la sección anterior en materia de capacitación y entrenamiento a sus miembros. Sin embargo, con base en la información suministrada por el Estado analizado en su respuesta al cuestionario y la recabada durante la visita *in situ*, se denota la ausencia de capacitación para la correcta y efectiva investigación de los delitos de corrupción por parte de la RFP y, en este sentido, el Comité formulará una recomendación. (Véase recomendación 4.4.3. de la sección 4.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

[282] En este mismo orden de ideas, el Comité sugiere que dentro de los programas de capacitación e inducción para los oficiales de nuevo ingreso, la RFP prevea también incluir talleres y/o cursos de capacitación con respecto a las normas de conducta, valores éticos y disciplina que rigen a los miembros de la institución. (Véase recomendación 4.4.4. de la sección 4.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

[283] En tercer lugar, con base en la información recabada durante la visita *in situ*, el Comité toma nota de los esfuerzos que viene adelantando la RFP para contar a la brevedad con nuevos sistemas informáticos y tecnológicos que le permitirán, entre otros aspectos, una mejor y más eficiente gestión de expedientes en cuanto a las investigaciones que ésta realiza, así como para la identificación de delincuentes reincidentes y otros aspectos forenses. Sin embargo, en esa misma oportunidad, la representación de la RPF se refirió a la importancia de fortalecer sus recursos tecnológicos e informáticos que le permitan de manera más efectiva, eficaz y oportuna hacerle frente a las diversas modalidades de criminalidad, incluidas las relacionadas con los actos de corrupción y, en este sentido, el Comité formulará una recomendación. (Véase recomendación 4.4.5. de la sección 4.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

[284] En cuarto lugar, el Comité reconoce las acciones descritas en la sección anterior en cuanto a la difusión e iniciativas de concientización que viene desarrollando la RPF a través de su sitio *web*, las redes sociales, en espacios de radio y televisión, así como en eventos públicos organizados por ésta o por otras instituciones. No obstante, el Comité considera que tales acciones e iniciativas podrían verse fortalecidas a través de la inclusión de campañas de prevención de las prácticas corruptas, de divulgación de las consecuencias que las mismas acarrearán, y de concientización sobre el deber de respetar y proteger el patrimonio público. (Véase recomendación 4.4.6. de la sección 4.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

[285] En quinto lugar, si bien es cierto que la RPF mantiene una política de apertura para que cualquier interesado que desee pertenecer a la institución presente su solicitud de inscripción sin que necesariamente exista alguna vacante de por medio, el Comité formulará una recomendación con base en lo expresando con ocasión de la visita *in situ* en donde la representación de la RPF manifestó que el número de policías con que cuentan en la actualidad se ubica por debajo de los estándares internacionales que recomiendan un cierto número de policías por un número determinado de habitantes. Sumado a ello, la representación de la RPF también se refirió a la necesidad de contar con más y mejores vehículos que permitan una mayor presencia a lo largo del país y acudir a tiempo cuando se requiera su presencia, teniendo en cuenta que aun siendo Saint Kitts y Nevis una jurisdicción pequeña, las distancias y vías de acceso entre sus comunidades constituyen una limitante para la intervención oportuna de la RPF cuando ésta se requiere. Asimismo, con base en la información recopilada durante la visita *in situ*, el Comité observa que junto con el aumento en el número de vehículos que integran la flotilla de vehículos policiales, es muy importante que el presupuesto prevea suficientes recursos para abastecerlos de combustible y darles mantenimiento regular. (Véase recomendación 4.4.7. de la sección 4.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

[286] Finalmente, en lo que tiene que ver con los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones, se toma nota de la información que sobre el particular suministró el Estado analizado en su respuesta al cuestionario y la recabada durante la visita *in situ*. Sin embargo, con base en la misma, el Comité estima conveniente que Saint Kitts y Nevis considere adoptar las medidas que se estimen pertinentes a modo de establecer, en el marco de la RPF, mecanismos de rendición de cuentas o la presentación de informes de gestión sobre el cumplimiento de sus funciones y la manera de hacer éstos públicos. (Véase recomendación 4.4.8. de la sección 4.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

4.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[287] En su respuesta al cuestionario, Saint Kitts y Nevis no proporciona información sobre resultados de la RPF en cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades principalmente aquellas relacionadas con la investigación de las prácticas corruptas tipificadas en el régimen penal del Estado analizado, así como tampoco en cuanto a los resultados de la oficina del Director de Asuntos Internos de la RPF en relación con las investigaciones e imposición de sanciones disciplinarias en cumplimiento de las funciones que le competen de conformidad con la Ley de Policía. Con base en lo anterior, el Comité no puede hacer una valoración integral sobre los resultados en este campo y, en este sentido, formulará las recomendaciones correspondientes. (Véase recomendaciones 4.4.9. y 4.4.10. de la sección 4.4 del literal “B” del capítulo II de este informe).

4.4. Conclusiones y recomendaciones

[288] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la RPF en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[289] **Saint Kitts y Nevis ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer a la RPF, como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 4 del literal “B” del capítulo II de este informe.**

[290] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere la siguientes recomendaciones:

- 4.4.1. Complementar los documentos que describen las funciones del personal al servicio de la RPF con procedimientos documentados, manuales o guías relacionados con las funciones de investigación de los delitos de corrupción y, si corresponde, hacerlos accesibles para su consulta en el sitio *web* institucional de la RPF. (Véase sección 4.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 4.4.2. Adoptar las medidas pertinentes para que los lineamientos y normas y los cuerpos normativos que rigen a la RPF, incluyendo la Ley de Policía, las Normas y Órdenes Estatutarias Policiales, la Órdenes Permanentes Policiales y otras normas internas de operaciones estén disponibles para su consulta por la ciudadanía en el sitio *web* institucional de la RPF. (Véase sección 4.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 4.4.3. Desarrollar programas de capacitación periódica para la correcta y efectiva investigación de los delitos de corrupción por parte de la RPF. (Véase sección 4.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 4.4.4. Complementar los programas de capacitación e inducción para los oficiales de nuevo ingreso a la RPF con talleres y/o cursos de capacitación con respecto a las normas de conducta, valores éticos y disciplina que rigen a los miembros de la RPF. (Véase sección 4.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 4.4.5. Dotar a la RPF con los recursos tecnológicos y sistemas informáticos que se estimen necesarios que le permitan de manera más efectiva, eficaz y oportuna hacerle frente a las diversas modalidades de criminalidad, incluidas las relacionadas con los actos de corrupción. (Véase sección 4.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 4.4.6. Diseñar e implementar campañas de prevención de las prácticas corruptas y de concientización a los funcionarios públicos respecto de la importancia del deber de respetar y proteger el patrimonio público. (Véase sección 4.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 4.4.7. Adoptar las medidas pertinentes para dotar a la RPF con los recursos humanos y materiales necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones, principalmente las relacionadas con la investigación de los delitos de corrupción, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos. (Véase sección 4.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).

- 4.4.8. Adoptar las medidas que se estimen pertinentes a modo de establecer, en el marco de la RPF, mecanismos de rendición de cuentas o la presentación de informes de gestión sobre el cumplimiento de sus funciones, principalmente las relacionadas con la investigación de los delitos de corrupción, y la manera de hacer éstos públicos. (Véase sección 4.2. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 4.4.9. Elaborar información estadística relativa a las investigaciones adelantadas por la RPF en relación las prácticas corruptas tipificadas en el régimen penal de Saint Kitts y Nevis que permita conocer cuántas averiguaciones se encuentran en curso y cuántas han sido concluidas mediante una sentencia, en orden de estar en posibilidades de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas o preventivas. (Véase sección 4.3. del literal “B” del capítulo II de este informe).
- 4.4.10. Elaborar y, si fuera adecuado, publicar información estadística sobre los resultados de los procesos de investigación disciplinaria en el ámbito de la RPF que permita conocer cuántas investigaciones se han iniciado y en contra de que funcionarios, cuantas están en curso, el número de resoluciones adoptadas así como el sentido de las mismas (amonestaciones, inhabilitaciones, multas, sentencias); el número de estas decisiones que implicaron que se le fincara responsabilidad al funcionario investigado o sanción dictada y el número de estas decisiones que resultaron en no ejercicio de la acción penal o absolución, en orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas. (Véase sección 4.3. del literal “B” del capítulo II de este informe).

III. BUENAS PRÁCTICAS

[291] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado no identificó buenas prácticas que compartir con los demás Estados miembros del MESICIC, de conformidad con el apartado V de la *Metodología para el Análisis de la Implementación de la disposición de la Convención seleccionada en la Cuarta Ronda* y la *Estructura* de los informes por país adoptadas, ambas, por el Comité para dicha Ronda. No obstante, con ocasión de la visita *in situ*, el Estado analizado identificó como una buena práctica, en relación con la RPF, los eventos de concientización sobre seguridad ciudadana y prevención de la delincuencias que ésta realiza en escuelas y comunidades.

ANEXO

AGENDA DE LA VISITA *IN SITU* A
SAINT KITTS Y NEVIS

<u>Primer día:</u> Lunes, 6 de octubre de 2014	
08:30 hrs. – 09:15 hrs. <i>Hotel Marriott</i>	Reunión de coordinación entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
09:15 hrs. – 10:00 hrs. <i>Hotel Marriott</i>	Reunión de coordinación entre los representantes del Estado analizado, los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
10:00 hrs. – 13:00 hrs. <i>Ministerio de Finanzas</i>	Reunión con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores.
10:00 hrs. – 11:30 hrs.	<u>Primera sesión:</u> Tema: <ul style="list-style-type: none">• La perspectiva de la sociedad civil y el sector privado sobre el rol de los órganos de control superior en la lucha contra la corrupción.
	<u>Participantes:</u> <ul style="list-style-type: none">- <i>Cámara de Comercio de Saint Kitts y Nevis</i> Carol Boddie, Representante- <i>Consejo Cristiano</i> Valentine B. Hodge, Presidente- <i>Parlamento Nacional Juvenil</i> DeHaan A. Henry, Presidente
11:30 hrs. – 11:40 hrs.	Receso
11:40 hrs. – 13:00 hrs.	<u>Segunda sesión:</u> Temas de la Primera Ronda: <ul style="list-style-type: none">• Normas de conducta.• Declaraciones patrimoniales.• Participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción y el acceso a la información pública.
	<u>Participantes:</u> <ul style="list-style-type: none">- <i>Cámara de Comercio de Saint Kitts y Nevis</i> Carol Boddie, Representante- <i>Consejo Cristiano</i> Valentine B. Hodge, Presidente- <i>Parlamento Nacional Juvenil</i> DeHaan A. Henry, Presidente

13:00 hrs. – 14:00 hrs.	Almuerzo
14:00 hrs. – 17:30 hrs. <i>Ministerio de Finanzas</i>	Oficina del Ombudsman
14:00 hrs. – 16:00 hrs.	<p><u>Panel 1:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Breve presentación sobre su propósito, funciones y estructura. • Régimen de competencias y mecanismos de coordinación interinstitucional. • Adopción de decisiones • Régimen jurídico y administrativo de los recursos humanos y acciones de capacitación. • Normativa interna para el cumplimiento de sus responsabilidades y fortalecimiento institucional. • Difusión de sus objetivos y funciones. <p><u>Participante:</u> Walford Gumbs, <i>Ombudsman</i></p>
16:00 hrs. – 17:30 hrs.	<p><u>Panel 2:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mecanismos de control interno y de rendición de cuentas. • Régimen presupuestario. • Resultados con relación al cumplimiento de sus responsabilidades y su difusión. • Dificultades para el cumplimiento de sus responsabilidades y necesidades de cooperación técnica. • Información sobre buenas prácticas. <p><u>Participante:</u> Walford Gumbs, <i>Ombudsman</i></p>
17:30 hrs. – 18:00 hrs.	Reunión informal entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
<u>Segundo día: Martes, 7 de octubre de 2014</u>	
9:00 hrs. – 12:30 hrs. <i>Procuraduría General</i>	Departamento de la Corte de Magistrados
09:00 hrs. – 10:30 hrs.	<p><u>Panel 3:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Breve presentación sobre su propósito, funciones y estructura. • Régimen de competencias y mecanismos de coordinación interinstitucional. • Adopción de decisiones.

	<ul style="list-style-type: none"> • Régimen jurídico y administrativo de los recursos humanos y acciones de capacitación. • Normativa interna para el cumplimiento de sus responsabilidades y fortalecimiento institucional. • Difusión de sus objetivos y funciones.
	<u>Participantes:</u> Josephine Mallalieu, Magistrada Principal Chelesa Rawlins, Subsecretaria
10:30 hrs. – 12:30 hrs.	<u>Panel 4:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Mecanismos de control interno y de rendición de cuentas. • Régimen presupuestario. • Resultados con relación al cumplimiento de sus responsabilidades y su difusión. • Dificultades para el cumplimiento de sus responsabilidades y necesidades de cooperación técnica. • Información sobre buenas prácticas.
	<u>Participantes:</u> Josephine Mallalieu, Magistrada Principal Chelesa Rawlins, Subsecretaria
12:30 hrs. – 14:00 hrs.	Almuerzo
15:30 hrs. – 18:30 hrs. <i>Procuraduría General</i>	Oficina del Fiscal General
15:30 hrs. – 17:00 hrs.	<u>Panel 5:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Breve presentación sobre su propósito, funciones y estructura. • Régimen de competencias y mecanismos de coordinación interinstitucional. • Régimen jurídico y administrativo de los recursos humanos y acciones de capacitación. • Normativa interna para el cumplimiento de sus responsabilidades y fortalecimiento institucional. • Difusión de sus objetivos y funciones.
	<u>Participante:</u> Travers S. Sinanan, Fiscal General
17:00 hrs. – 18:30 hrs.	<u>Panel 6:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Mecanismos de control interno y de rendición de cuentas. • Régimen presupuestario.

	<ul style="list-style-type: none"> • Resultados con relación al cumplimiento de sus responsabilidades y su difusión. • Dificultades para el cumplimiento de sus responsabilidades y necesidades de cooperación técnica. • Información sobre buenas prácticas.
	<u>Participante:</u> Travers S. Sinanan, Fiscal General
17:30 hrs. – 18:00 hrs.	Reunión informal entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
Tercer día: Miércoles, 8 de octubre de 2014	
09:00 hrs. – 12:30 hrs. <i>Procuraduría General</i>	Real Fuerza Policial de Saint Kitts y Nevis
09:00 hrs. – 10:30 hrs.	<u>Panel 7:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Breve presentación sobre su propósito, funciones y estructura. • Régimen de competencias y mecanismos de coordinación interinstitucional. • Adopción de decisiones. • Régimen jurídico y administrativo de los recursos humanos y acciones de capacitación. • Normativa interna para el cumplimiento de sus responsabilidades y fortalecimiento institucional. • Difusión de sus objetivos y funciones.
	<u>Participantes:</u> Vaughan Henderson, Comisionado Adjunto Cromwell Henry, Superintendente
10:30 hrs. – 12:30 hrs.	<u>Panel 8:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Mecanismos de control interno y de rendición de cuentas. • Régimen presupuestario. • Resultados con relación al cumplimiento de sus responsabilidades y su difusión. • Dificultades para el cumplimiento de sus responsabilidades y necesidades de cooperación técnica. • Información sobre buenas prácticas.
	<u>Participantes:</u> Vaughan Henderson, Comisionado Adjunto Cromwell Henry, Superintendente
12:30 hrs. – 14:00 hrs.	Almuerzo

14:00 hrs. – 17:00 hrs. <i>Procuraduría General</i>	Temas de la Primera Ronda
	<p><u>Panel 9:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Normas de conducta y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento. • Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos. • Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción. • Asistencia y cooperación.
	<p><u>Participantes:</u></p> <p>Jason Hamilton, Procurador General</p> <p>Simone Bullen-Thompson, Abogada General</p>
17:00 hrs. – 17:30 hrs.	Reunión informal entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
17:30 hrs. – 18:00 hrs.	Reunión final' entre los representantes del Estado analizado, los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.

**AUTORIDADES DE CONTACTO DEL ESTADO ANALIZADO PARA LA
COORDINACIÓN DE LA VISITA *IN SITU*, Y REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS
MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR Y DE LA SECRETARÍA
TÉCNICA DEL MESICIC**

ESTADO ANALIZADO

SAINT KITTS Y NEVIS

Jason A. Hamilton

Experto Titular ante el Comité de Expertos del MESICIC
Procurador General

Simone Bullen-Thompson

Experta Alterna ante el Comité de Expertos del MESICIC
Abogada General

ESTADOS MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR

MÉXICO

Jaime A. Cerdio

Director General Adjunto de Estudios y Políticas de Transparencia y Rendición de Cuentas
Secretaría de la Función Pública

María F. Cánovas

Directora de Anticorrupción y Transparencia
Dirección de Cooperación Internacional de la Procuraduría General de la República

TRINIDAD Y TOBAGO

Samraj Harripaul

Abogado Principal y Presidente de la Comisión de Reforma a la Ley
Ministerio de la Procuraduría General

SECRETARÍA TÉCNICA DEL MESICIC

Rodrigo Cortés

Oficial Jurídico del Departamento de Cooperación Jurídica
Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA